

Cambio demográfico y desigualdad social en Venezuela al inicio del tercer milenio



**Vulnerabilidad social,
sociodemográfica y pobreza:
Distinciones conceptuales, antecedentes
empíricos y aportes de política**

Jorge Rodríguez Vignoli

Jorge Rodríguez Vignoli

Sociólogo (Universidad de Chile), Postgrado en Políticas de Población y Políticas y Programas de Desarrollo (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE), Estudios de Doctorado en Historia Económica y Social de América (Universidad de Santiago de Chile-USACH). Investigador del Área de Población y Desarrollo del CELADE.

Vulnerabilidad social, sociodemográfica y pobreza: Distinciones conceptuales, antecedentes empíricos y aportes de política

Jorge Rodríguez Vignoli

I. Elementos conceptuales

Vulnerabilidad es «la cualidad de vulnerable», que se aplica a lo «que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente» (www.RAE.es). Para que se produzca un daño deben concurrir un evento potencialmente adverso —es decir, un riesgo, que puede ser exógeno o endógeno—, una incapacidad de respuesta frente a tal contingencia —que puede deberse a la ausencia de defensas idóneas o a la carencia de fuentes de apoyo externas— y una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por la materialización del riesgo. Esta definición literal ayudará a especificar un esquema analítico simple más adelante. Pero, antes cabe revisar de manera muy sucinta el amplio uso de esta expresión o concepto en las ciencias sociales, con especial referencia a su utilización intensa en los últimos años.

A. Usos disciplinarios y grupos vulnerables:

La noción de vulnerabilidad se usa con especificaciones disciplinarias. En los estudios sobre seguridad alimentaria se define como: «la probabilidad de una reducción aguda en el acceso a los alimentos o de una caída de los niveles de consumo por debajo del índice mínimo de sobrevivencia»¹. En estudios macroeconómicos frecuentemente se alude a la vulnerabilidad para referirse a exposición y sensibilidad frente a shocks comerciales o financieros de origen externo. Por su parte, estudios recientes sobre psicología del adolescente advierten que el componente central de su vulnerabilidad —que corresponde a los riesgos a los que están «sobreexpuestos» como deserción escolar, embarazo temprano o agresión física— se ha usado al menos en dos sentidos: a) «*conductas riesgosas*» — como la ingesta de alcohol y drogas, las relaciones sexuales no protegidas o el involucramiento en pandillas—; y b) «*situaciones riesgosas*», que suelen dividirse entre

¹ http://www.wfp.it/vam_documents/va/va99/html/vamover.htm

las de naturaleza genética, socioestructural o familiar —como la pertenencia a una minoría étnica, la situación de pobreza o la uniparentalidad— y las de tipo social contingente —como la residencia en barrios violentos—. Estas interpretaciones originan dos discursos sobre la vulnerabilidad de los y las adolescentes, que se traducen en sendas opciones de política: una orientada a las decisiones individuales; y otra a los contextos en que se desarrollan (Fischhoff, Nightingale y Iannota, 2001); ambos discursos son coherentes y convincentes, pero se fundan en nociones distintas de riesgo.

Adicional a estas definiciones o usos disciplinarios, la noción de vulnerabilidad se ha usado extensamente para referirse a grupos vulnerables. Aquello tiene una larga trayectoria en el análisis y en las políticas sociales y se le usa en varios sentidos: (a) grupos que se hallan en «riesgo social», es decir, compuestos por individuos que debido a factores de su ambiente doméstico o comunitario son más propensos a experimentar daños o problemas sociales; (b) segmentos de la población que por actuar según un patrón de conducta común tienen mayor probabilidad de experimentar algún evento dañino; (c) colectivos que comparten algún atributo básico común —edad, sexo, condición étnica o localización territorial—, que se supone genera problemas similares. Ahora bien, no obstante la utilidad y uso persistente de la noción de grupos vulnerables con propósitos de análisis o de política, la discusión actual sobre vulnerabilidad social y sociodemográfica no se ordena en función de los «grupos vulnerables», tal como quedará claro en la sección que sigue.

B. Vulnerabilidad social

La utilización y el debate actuales de la noción de vulnerabilidad tienen poco que ver con los usos disciplinarios antes mencionados e incluso con la identificación de grupos vulnerables; no obstante, un resultado de las investigaciones recientes es la identificación de grupos vulnerables «clásicos» o «emergentes». A continuación se procura ilustrar de manera muy breve los principales componentes que ordenan la discusión sobre vulnerabilidad, que originan distintos enfoques en desarrollo.

1) Activos:

Aunque los activos no son un fenómeno «nuevo», la elaboración hecha por Caroline Moser (asset/vulnerability framework, 1998) caló profundo por la variedad de lecturas de política que sugiere. En el marco del debate sobre las limitaciones de las definiciones tradicionales de pobreza² —más que la metodología precisa, el hecho de que capturan situaciones de bienestar estáticas, que son el resultado de un proceso previo que se desconoce— se propone que si bien la vulnerabilidad de los pobres se asocia a un acervo

² «In demonstrating the complexity of asset portfolio management in the context of urban economic crisis, the study contributes to a growing body of evidence that points the limitations of income-poverty measurements to capture complex external factors affecting the poor as well as their responses to economic difficulty» (Moser, 1998, p. 14).

de activos (entendidos estos de manera muy amplia: trabajo, capital humano, vivienda, relaciones domésticas y capital social) inferior en cantidad y/o calidad en la práctica los pobres cuentan con activos que usan para enfrentar su situación desmedrada. Como corolario, se sugiere que las políticas apropiadas para superar la vulnerabilidad de los pobres deben promover el uso de estos activos o fortalecer la capacidad de manejarlos eficientemente.³

En una línea algo distinta, la noción de activos se usó en una amplia investigación efectuada en la región cuya idea básica era partir de la pobreza por ingresos para luego identificar los factores determinantes de su dinámica a escala doméstica. Se planteaba que aquella dependía de la disponibilidad y uso de los activos: «los ingresos del hogar están dados por el rendimiento de los diversos activos poseídos y utilizados de modo productivo por los miembros de la familia. Estos incluyen al capital humano, además de los activos físicos y financieros, así como el acceso al denominado capital social» (Attanasio y Székely, 1999, p. 361). El equipamiento del hogar también ha sido considerado típicamente como un activo (CONAPO, 2001). Dos grandes conclusiones de política de esta investigación: a) hay muchas maneras de incidir sobre el acervo de activos de los pobres, pero la viabilidad de las políticas y la sustentabilidad de su impacto difieren; y b) hay que concentrar en los procesos de acumulación de activos en procura de revertir su distribución desigual desde el nacimiento, lo que llama a considerar el ciclo de vida en las políticas contra la pobreza y de promoción de activos (Attanasio y Székely, 1999, p. 326).

Finalmente, un grupo multidisciplinario de trabajo que inició sus investigaciones en las sociedades del cono sur de América ha extendido el asset/vulnerability framework sugiriendo que: a) los activos deben ser útiles para el desarrollo de estrategias de movilidad social y no sólo para salir de la pobreza o enfrentar crisis económicas; b) la vulnerabilidad no se define únicamente en función de los activos disponibles sino según su relación con el contexto socioeconómico, representado por las estructuras de oportunidades⁴, que son «probabilidades de acceso a bienes, servicios o actividades que inciden sobre el bienestar del hogar porque le facilitan el uso de recursos propios o le suministran recursos nuevos, útiles para la movilidad e integración social a través de los canales existentes» (Kaztman, 2000, p. 299). Por ende, las condiciones de vulnerabilidad se refieren tanto a la disponibilidad de activos como a las probabilidades de acceso que ofrecen el Estado, el mercado y la comunidad; por lo mismo los radicales cambios que han experimentado estas tres instituciones en los últimos años han configurado un escenario de vulnerabilidades emergentes, sobre todo por la crisis de los mecanismos de protección frente a la movilidad social descendente. Así las cosas, si la vulnerabilidad social depende del acervo de activos su principal novedad estriba en la amplitud de los activos considerados, que no en una situación emergente o específica del mundo contemporáneo;

³ «*Identifying what the poor have, rather than they do not have, focuses on their asset ... The asset framework goes beyond a «static» measuring of the poor, toward classifying the capabilities of poor population to use their resources to reduce their vulnerability...*» (Moser, 1998, p. 1 y p. 14).

⁴ De hecho, este enfoque suele denominarse «activos/estructuras de oportunidades» (Kaztman y otros, 1999).

por cierto, en aquellas lecturas que añaden como fuente de vulnerabilidad a la dinámica de las estructuras de oportunidades, éstas podrían tener connotaciones particulares en la actualidad, vinculadas con el desgaste o crisis de mecanismos históricos de ofrecimiento de activos o de espacios de realización de los mismos.

2) Shocks:

Por definición, la vulnerabilidad se presta para el examen de los shocks, vale decir, de los golpes externos que generan daño a comunidades, hogares y personas. Con todo, rápidamente se advierte que al menos dos preguntas distintas pueden efectuarse en esta línea. ¿Cuáles son los individuos con mayor probabilidad de experimentar un shocks? Cuando se trata de eventos externos adversos tangibles la respuesta puede ser relativamente sencilla y en esa línea se ha desarrollado buena parte del trabajo sobre vulnerabilidad ambiental, la que puede ser precisada, al menos parcialmente, en función de la localización de los individuos. ¿Cuáles son los individuos más dañados por los shocks?, consulta que no tiene nada de extraño, pues la evidencia muestra que dentro de una misma población afectada hay enormes variaciones de las consecuencias del shocks, cualquiera éste sea.

En relación con la pobreza, la vulnerabilidad como exposición a shocks ha sido usada para indagar en las repercusiones que las crisis económicas tienen sobre los hogares, en particular los pobres. Los resultados de unas pocas investigaciones llevadas a cabo por economistas —que han contado con datos de panel más bien infrecuentes en la región—, sugieren que los pobres son más afectados por las crisis económicas —es decir, su ingreso o su consumo se reduce más que la media durante tales episodios—, porque: i) cuentan con fuentes de ingresos del hogar poco diversificadas; ii) menos activos y los que tienen son menos valorados; iii) escasa o nula disponibilidad de ahorros o de acceso al crédito; iv) pocas opciones de incrementar la densidad laboral; v) escasas opciones de usar experiencias en trabajos nuevos; vi) poco acceso a transferencias de otros hogares; vii) poco espacio para la modificación de hábitos de consumo; y viii) dificultades para producir directamente (Glewwe y Hall, 1995). Estas constataciones sugieren la conveniencia de establecer redes de asistencia especiales para los pobres en casos de crisis económicas.

Así las cosas, la vulnerabilidad depende de la existencia de shocks y de los estragos que causan. Aunque la experiencia sugiere que algunos shocks importantes pudieran ser más frecuentes en la actualidad —por ejemplos: las crisis económicas—, un balance en tal sentido probablemente sugiera un cuadro más ambiguo y complejo. Por ende, en esta línea la vulnerabilidad no es una condición emergente sino una condición permanente. Eventualmente la naturaleza de los shocks cambia, pero evaluar su magnitud a escala probablemente no arrojaría resultados satisfactorios.

3) Entradas/salidas de la pobreza:

La persistencia de la pobreza a pesar de las políticas implementadas para enfrentarla y de los signos de recuperación económica observados en algunos períodos ha sido uno de los estímulos más vigorosos para relevar la categoría de vulnerabilidad social. En este

caso, se trata de un tipo específico de vulnerabilidad social, a saber, la probabilidad de caer en la pobreza. Y la alta —y creciente, según algunas piezas de evidencia— rotación en torno a la línea de la pobreza sugiere una franja específica de hogares que tienen una alta probabilidad de estar entrando y saliendo de la pobreza, dependido de las fluctuaciones de la economía y de factores idiosincrásicos.

Diferentes estudios sugieren que entre el 10% y el 15% de los hogares se hallan en esta franja de vulnerabilidad a la pobreza, cuyos límites estarían aproximadamente entre las 0,9 y las 1,25 líneas de pobreza (CEPAL, 2000a, p. 44; Filgueira, 1998, p. 124).

Un rasgo destacable de la vulnerabilidad como la probabilidad de caer en la pobreza es su delimitación precisa y clara del riesgo relevante, aunque por ello le cuesta distinguirse de la noción original de pobreza. Sin embargo, lo aparente mayor rotación en torno a la línea de la pobreza atañe a un fenómeno emergente que pone en jaque las ideas clásicas sobre movilidad social en la región. Esto abre espacios para que esta vulnerabilidad se vincule con los cambios en el mercado de trabajo —flexibilidad/ inestabilidad del empleo— y con las transformaciones de las instituciones de protección social que bloqueaban el descenso a la pobreza de la clase media.

4) Inseguridad/incertidumbre modernas:

La vulnerabilidad social se ha vinculado con nuevas condiciones de incertidumbre, en ocasiones denominadas «modernas» o «contemporáneas»; no se trata de una «mayor» incertidumbre sino de inseguridades emergentes que tienden a acabar con la idea de que el desarrollo social entraña mayor estabilidad para las personas. Las fuentes de esta incertidumbre moderna son de la más diversa especie. Algunos autores ponen énfasis en el cambiante mundo del trabajo, en particular el fin de las seguridades ofrecidas por el pleno empleo y el trabajo estable. Otros apuntan al cambio vertiginoso —promovido por fuerzas materiales como la tecnología, pero también por procesos culturales— cuya principal consecuencia es la transitoriedad y obsolescencia del acervo material y simbólico, vale decir, inestabilidad de los pilares básicos. Más marcadamente cultural, la extensión de la denominada reflexividad promueve la revisión y actualización cotidiana en todos los ámbitos vitales.

Si bien esta línea de análisis tiene como referencia empírica a las sociedades desarrolladas insertas en la matriz cultural de Occidente, sus argumentos no son totalmente ajenos a la realidad latinoamericana y caribeña. En primer lugar, porque la región se inscribe —con especificidades e hibridaciones— en esta matriz cultural. En segundo término, porque algunos componentes de la modernidad cultural han demostrado tener mayor capacidad de difusión y consolidación que la modernización socioeconómica. En tercer lugar, porque el proceso de globalización actualmente en curso interconecta más estrechamente —en particular en el plano simbólico— a todas las regiones del mundo. Y en cuarto término, porque algunos de los pilares del funcionamiento concreto de la modernidad tardía en las sociedades desarrolladas de Occidente —como la flexibilidad (Sennet, 2000) y el cálculo reflexivo de las opciones (Beck, Giddens y Lash, 1997)— se

han incorporado con gran rapidez al discurso y a la práctica de los actores sociales latinoamericanos y caribeños. En suma, la vulnerabilidad asociada a esta «incertidumbre fabricada» afecta también a los actores sociales de América Latina y el Caribe.

Claro está, en todo caso, bajo este enfoque vulnerabilidad y pobreza siguen derroteros distintos. La incertidumbre, el cambio vertiginoso y la reflexividad no son patrimonio de los pobres, más aun, pueden estar más extendidos entre los no pobres. Aquello tiende a compensarse por el hecho de que los no pobres cuentan con más herramientas para manejar la «inseguridad moderna».

5) Desprotección:

El desamparo que deriva de la erosión de instituciones claves de la protección social también ha sido un poderoso incentivo para acudir a la categoría de vulnerabilidad con propósitos descriptivos. Muchos riesgos neutralizados por la acción de instituciones protectoras se desbocan cuando estas últimas tienden a desaparecer. Tal línea de razonamiento pareciera —al igual que la previa— más apropiada para países desarrollados en que los regímenes de Estado de Bienestar han reculado, dejando descuidados a segmentos antes guarecidos de la población. Sin embargo, se ha subrayado que en la región el Estado desarrollista tejió redes de protección productiva, política y social con matices nacionales. Y la crisis financiera e ideológica de dicho Estado significó el fin del resguardo —no siempre eficiente ni prioritario— para vastos sectores del aparato productivo y de la población. En particular las clases medias tradicionales, históricamente vinculadas al desarrollo del Estado nacional fueron las más afectadas, pues la retracción unilateral del Estado en ámbitos esenciales para ellas —el empleo y la educación— y la creciente focalización de los recursos en los sectores más pobres entrañó grados crecientes de indefensión para ellas. La erosión de los mecanismos de solidaridad y de apoyo comunitario —particularmente activos entre los sectores populares y los grupos obreros— también ha sido esgrimido como factor gravitante para la consideración de la vulnerabilidad como una categoría especialmente relevante en la actualidad (Pizarro, 2001). Finalmente, se ha destacado que la protección social basada en los mecanismos de aseguramiento, aunque de la mayor importancia, se debilita, puesto que los riesgos modernos son difíciles de predecir, en ocasiones son catastróficos, son personalizados y no han dejado de ser acumulativos, todo lo cual dificulta la extensión del aseguramiento como estrategia de protección, sobre todo el privado (Esping-Andersen, 2000).

Nuevamente vulnerabilidad y pobreza se distinguen. Más aun, atendiendo a la desprotección como el núcleo de la vulnerabilidad, lo que se advierte es que en la región aquella atañe más a las clase medias y a los trabajadores pobres que a los muy pobres e indigentes, los que incluso podrían haber obtenido más apoyo estatal en la actualidad que en el pasado como resultado de la focalización del gasto público.

C. Vulnerabilidad social y población

Las variables de población interactúan con los diferentes componentes de la vulnerabilidad social descritos en la sección previa. A continuación se describe de manera muy apretada algunas de estas interacciones, varias de las cuales han sido recogidas en la literatura especializada y otras cuantas resultan persuasivas y con apoyo empírico relativamente estilizado.

1) ¿Cuáles son los activos demográficos? ¿Y acaso no hay, más bien, pasivos demográficos?:

Entre los activos que aparecen en el *asset/vulnerability framework* hay al menos un par que tiene raíces sociodemográficas. Entre ellos está el activo por excelencia: el trabajo (Rematoso, 2002; Kazzman y Wormald, 2002; Moser, 1998). El problema estriba en que la movilización de este activo entre los pobres tiene severos límites y hasta efectos perversos a largo plazo. Los límites están dados por la exigua valorización de la mano de obra ociosa de los pobres, lo que desalienta su movilización o implica que los efectos sobre el presupuesto doméstico de la misma sean pequeños. Los efectos perversos se relacionan con el trabajo infantil, una práctica aún frecuente en la región (CEPAL, 2001a). Las relaciones intradomésticas también son un activo en el *asset/vulnerability framework* y estas dependen, entre otros factores, de la estructura y la composición del hogar, que, en alguna medida son atributos sociodemográficos. Sin embargo, es menos claro el sentido en el cual esta estructura y esta composición pueden ser «movilizadas».

Varios otros potenciales activos sociodemográficos han sido descritos en la literatura sobre «estrategias de sobrevivencia»; entre ellos la migración y la nupcialidad. Sin embargo, entre los pobres la movilización de aquellos tiene varias limitaciones que debilitan los eventuales retornos de su materialización. Con todo, la migración es esencialmente una opción con la que cuentan los hogares pobres para enfrentar situaciones potencialmente adversas y de hecho ha sido considerada como una de las «respuestas demográficas» ante *shocks* externos, con independencia de los dividendos que provoque con posterioridad. Sobre la nupcialidad, su calidad de activo no resulta evidente entre los pobres, como se subrayará más adelante. Por cierto, el más conocido y a la vez polémico activo sociodemográfico descrito por la literatura de estrategias de sobrevivencia —a saber la alta paridez— clasifica en el activo mano de obra familiar ya mencionado. En la actualidad, sin embargo, difícilmente se le consideraría un activo.

Paradójicamente, la existencia de **pasivos** demográficos resulta más evidente que la de activos, en particular entre los pobres (Rematoso, 2002). De hecho, la **dinámica demográfica de la pobreza** (Martínez, 1999; CEPAL/CELADE, 1995; Livi-Bacci, 1995) es emblemática por su condición de **pasivo demográfico** de los pobres. La sobremortalidad, la sobrefecundidad y la alta dependencia demográfica son pasivos, porque implican costos monetarios y no monetarios y porque dificultan la adquisición de activos. Cabe subrayar que la visibilidad de los pasivos demográficos ha sido recogida por el enfoque de los «activos y estructuras de oportunidades», el que además de la dinámica

demográfica de la pobreza releva otros pasivos sociodemográficos: (a) la reproducción temprana; (b) la concentración de los pobres dentro de las ciudades; y (c) la inestabilidad y las fracturas familiares (Kaztman y Wormald, 2002; Kaztman y otros, 1999; Filgueira, 1998). Un dato no menor, es que estos pasivos de los pobres no tendrían signos de atenuación, como sí los tiene la dinámica demográfica de la pobreza en varios países de la región.

2) Shocks demográficos:

En principio, es posible enumerar una lista de shocks demográficos que de manera directa golpean el presupuesto y el funcionamiento comunitario, doméstico e individual. Entre ellos están la pérdida de aportantes por muerte, emigración o fractura familiar; los costos materiales, no materiales y de oportunidad por morbimortalidad, embarazo/partos/crianza, y el estrechamiento presupuestarios y físico por el «allegamiento» de no aportantes. Buena parte de estos shocks son más frecuentes entre los pobres porque se vinculan precisamente con la dinámica demográfica de la pobreza. En tal sentido, la vulnerabilidad ante algunos shocks demográficos es una manifestación particular de la dinámica demográfica de la pobreza. Mientras esta última actúa como atributo que desgasta progresivamente el patrimonio, el presupuesto y los activos, los shocks demográficos son su manifestación específica en lapsos de tiempo acotados, que tienen un impacto rápido y directo —que puede prolongarse en el tiempo— que se expresa en un brusco deterioro de las cuentas comunitarias domésticas o individuales.

Es clave retener que parte importante de estos shocks tienen tal condición precisamente porque afectan a los pobres. Un niño adicional para un hogar pobre tiene más probabilidades de ser un shock porque: (a) el acervo inicial de patrimonio y activos es exiguo y, por ende, implica una redistribución adversa para el colectivo doméstico; y (b) en promedio los nacimientos no deseados y/o no planificados son más frecuentes entre los pobres. En el caso de la morbimortalidad, la condición de shock es esencialmente transversal, no así sus repercusiones que son más profundas entre los pobres porque cuentan con acceso más limitado a mecanismos de respuesta y apoyo. Los shocks relacionados con la migración son más complejos, pues aquella no sigue un patrón claro respecto de la condición de pobreza. Con todo, para los pobres la migración suele ser una opción de escapatória y en tal sentido escasamente informada y planificada. En tanto, un cambio brusco y efectuado en condiciones precarias y o adversas, puede desestructurar la comunidad u hogar de origen constituyéndose en un shock.

Aunque hay experiencias de recolección de información sobre shocks mediante cuestionario especializados (Moncada, 2001), las investigaciones al respecto son escasas. Por una parte, aquello se debe precisamente a la falta de datos retrospectivos o de panel recogidos especialmente para medir shocks y sus secuelas. Y por la otra, obedece a que cuando se procura analizar los shocks otros de naturaleza diferente a la demográfica son prioritarios; entre estos destacan eventos agregados, como las crisis económicas o los desastres naturales, o idiosincrásicos pero sin ambigüedad, como el desempleo. Ahora

bien, uno de los pocos estudios en la región que procuró medir shocks y sus impactos consideró a los demográficos, pero su conclusión fue inconsistente con las expectativas, pues los hogares pobres tuvieron una prevalencia de shocks demográficos inferior al resto. Los autores del estudio atribuyeron esta paradoja a la estructura etaria más envejecida de los hogares más pudientes, la que los hacía más proclives a los shocks de morbilidad, lo que revela al menos una deficiente definición de los shocks demográficos.

De manera paralela a la identificación de los shocks demográficos y sus secuelas, la vulnerabilidad por exposición a shocks ofrece otra línea de influencia de las variables de población. Se trata de la existencia de rasgos sociodemográficos que desprotegen contra shocks no demográficos.

En particular, en un estudio sobre Perú, Glewwe y Hall (1995) encontraron que entre los hogares afectados por una mayor caída del ingreso o del consumo durante las crisis económicas, están aquellos con un gran número de niños y la consecuente relación de dependencia demográfica elevada. En este caso, la inflexibilidad presupuestaria y de movilidad por dependencia de niñez amplifica el impacto doméstico de las crisis económicas.

3) Oscilaciones en torno a la línea de la pobreza

Los factores demográficos que desempeñan un papel en las entradas y salidas de la pobreza han sido descritos en los dos acápite previos. Se trata del socavamiento paulatino de las finanzas personales, domésticas o comunitarias que se derivan de fenómenos demográficos como unas morbilidad, fecundidad y dependencia elevadas, así como la abrupta caída del ingreso doméstico por algún shock demográfico.

Sin embargo, en este caso es posible una visión más pormenorizada que en los anteriores porque la base de información es más amplia y sistemática. En la mayor parte de los países de la región se trata de datos transversales, por ejemplo de encuestas de hogares, que ofrecen un perfil demográfico del segmento que se encuentra en la zona de vulnerabilidad ante la pobreza. La evidencia recogida al respecto (CEPAL, 2000a) sugiere patrones distintivos que se asemejan a los de la dinámica demográfica de la pobreza. En esa misma línea, aunque con una perspectiva diacrónica, algunos cálculos recientes y aún exploratorios sugieren que un número elevado de niños no sólo se asocia a la pertenencia a la franja de vulnerabilidad ante la pobreza (como se describe en CEPAL, 2000 y en CEPAL/CELADE, 2002 y 1998) sino que también a una menor movilidad ascendente de los pobres y una mayor movilidad descendente de los no pobres (Lykke E. Andersen, 2002, mimeo FNUAP-Nicaragua).

Por otra parte, hay argumentos consistentes para sostener que la inestabilidad familiar y en particular las separaciones y divorcios generan, entre otras adversidades, bruscas oscilaciones en los ingresos domésticos, lo que puede conducir a una reclasificación de los hogares como pobres. Esta movilidad social descendente afecta, por razones de género

bien conocidas, particularmente a mujeres y niños, que suelen ser los «abandonados» y los menos habilitados para enfrentar la nueva situación. Los datos al respecto están relativamente sistematizados en los países desarrollados: en los Estados Unidos se estima que durante el primer año de separación las madres y los/las hijos/as sufren una pérdida del 35% al 45% del «ingreso ajustado a necesidades» (Bartfeld, 2000, p. 203). Por cierto, estas cifras no deben conducir a conclusiones de política improcedentes o autoritarias, más son insumos relevantes para el examen del complejo fenómeno de rotación en torno a la línea de la pobreza, con mayor razón si de manera razonable puede preverse un aumento de su incidencia, aunque con cambios cualitativos, en el futuro.

4) Inseguridad/Protección:

Por su misma naturaleza estructural y simbólica, esta visión de la vulnerabilidad se presta menos en principio para la inclusión de las variables de población y su vinculación con la pobreza. De hecho, en estricto rigor el avance de la transición demográfica —es decir, el creciente control sobre el proceso reproductivo que ejercen las personas y parejas, así como el progresivo aumento de la capacidad para postergar la muerte que exhiben los individuos— es una manifestación de reducción de incertidumbre mas no de aumento.

Pero esta primera visión es más bien parcial, pues tanto el avance de la transición demográfica como la emergencia de lo que se ha dado en llamar una segunda transición demográfica introduce nuevas fuentes de incertidumbre demográfica en el futuro. A este respecto sobresalen: el decrecimiento de la población; el envejecimiento y la inestabilidad familiar. Y cuando estas nuevas fuentes de incertidumbre se combinan con la desprotección pública creciente que sugiere una de las nociones de vulnerabilidad más usadas en la región se puede concluir que procesos demográficos profundos añaden nuevas presiones y demandan crecientes gastos en condiciones de persistentes carencias financieras, debilidad institucional y pertinaz pobreza cuyo abatimiento requiere recursos. En este sentido, una reflexión adicional atañe a los sujetos actuales y posteriores de estos procesos demográficos de largo plazo y de sus probabilidades de convertirse en futuros pobres.

5) Vulnerabilidad sociodemográfica: un enfoque de riesgos/capacidad de respuesta/adaptación:

Diagrama 1: Un enfoque de vulnerabilidad sociodemográfica

$$V = f(R, IR, IAA)$$

No obstante los enormes avances que han proporcionado los enfoques conceptuales descritos con antelación, su concentración en una noción y concepto de vulnerabilidad, más o menos mensurable dependiendo del enfoque, es más bien una opción antes que una condición *sine que non*. De hecho, el trabajo elaborado por CEPAL/CELADE (2002)

sobre vulnerabilidad sociodemográfica si bien ha explorado en la dimensión demográfica de la vulnerabilidad social en sus diferentes acepciones (lo que se describió en el acápite C) siguió, a la postre, otros caminos, cual fue usar un enfoque de vulnerabilidad para el examen de las relaciones entre población y desarrollo. Esto significa considerar simultáneamente tres factores: a) riesgos (R); b) incapacidad de respuesta (IR); y c) inhabilidad de adaptación activa (IAA). Por cierto, esta opción no reviste gran novedad, pues ya al revisar los usos disciplinarios se advirtió de tal enfoque, por ejemplo, en los estudios de vulnerabilidad ambiental y alimentaria. Por lo demás, tampoco es desconocida por las propuestas teóricas antes descritas porque de manera abierta o implícita se reconoce la importancia de la capacidad de respuesta frente al factor generador de vulnerabilidad (falta de activos, shocks, volatilidad de ingresos, apoyos y protección social, etc.).

La principal ventaja, y simultáneamente importante debilidad, de esta aproximación es su carácter formal, pues no hay una referencia sustantiva respecto de las facetas de las comunidades, hogares y personas que son dañada por los riesgos sociodemográficos. Aquello está extensamente discutido en los recientes trabajos de CEPAL/CELADE y la única solución convincente es la especificación de la faceta afectada en cada ejercicio analítico. Por lo mismo, la pregunta ordenadora en el acápite que sigue remitirá a los procesos, atributos o eventos sociodemográfico que tienden a reproducir la pobreza — riesgos sociodemográficos—. Y aquellos se abordan de manera sintética y con apoyo en algunos hechos estilizados en la sección siguiente.

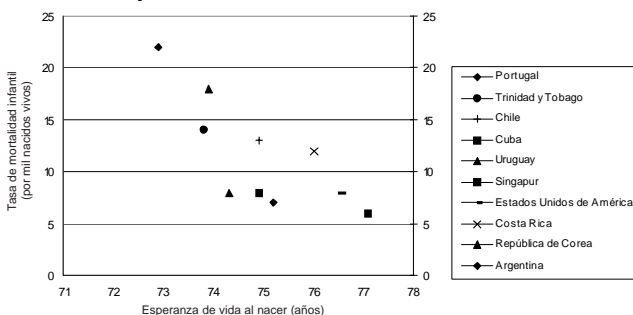
II. Riesgos sociodemográficos y pobreza: reproducción y/o caída en la pobreza.

A. La transición demográfica: ¿hacia el fin de la dinámica demográfica de la pobreza?

La transición demográfica ha avanzado aceleradamente en la región. La reducción de la mortalidad ha sido notable, toda vez que algunos países de la región (Cuba, Chile, Costa Rica, varios estados insulares del Caribe) han alcanzado niveles de esperanza de vida y de mortalidad infantil comparables a los de los países desarrollados (Gráfico 1). En relación con la fecundidad, la región como un todo ha bajado sus índices reproductivos en más de la mitad en los últimos 35 años —desde cerca de 6 hijos por mujer a mediados del decenio de 1960 hasta 2,5— en la actualidad y salvo Haití, Honduras, Guatemala y Paraguay la tasa global de fecundidad es inferior a cuatro hijos por mujer⁶. Por cierto, estos cambios se han expresado en el crecimiento demográfico, cuyas tasas han bajado significativamente (Cuadro 1). Así, aunque aún persisten brechas relevantes entre los países —que se reflejan en las tasas de crecimiento de la población (Cuadro 2)—, la convergencia parece ser la tendencia predominante.

⁶ Ver Demographic and Health Surveys (DHS): www.measuredhs.com e International Reproductive Health Surveys (IRHS): www.measureprogram.org.

Gráfico 1
Esperanza de vida y tasa de mortalidad infantil en países de
baja mortalidad seleccionados en el mundo



Fuente: United Nations, 2001, Volumen I, Tablas A31 y A30

Cuadro 1
Tasas media anuales de crecimiento de la población, períodos intercensales, 1950-2000,
países de la región con información del censo
de la ronda de 2000 disponible

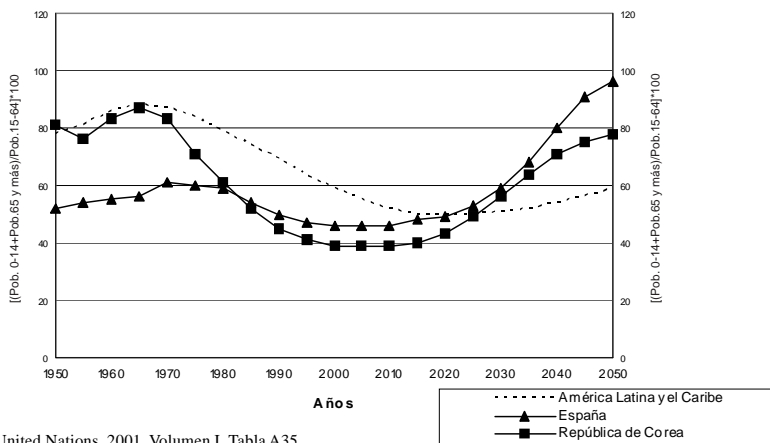
PAÍSES/PERÍODOS	1950-1960	1960-1970	1970-1980	1980-1990	1990-2000
Argentina	1.72	1.55	1.78	1.46	1.00
Bolivia	1.63	-	2.17	-	2.75
Brasil	3.4	2.47	2.45	1.74	1.47
Chile	2.53	1.98	2.03	1.64	1.20
Venezuela	3.92	3.66	3.04	2.45	2.04
Costa Rica	3.98	3.33	2.31	-	2.83
México	3.03	3.35	3.15	2.00	1.83
Panamá	2.89	3.01	2.34	2.55	1.98

Fuente: Cálculos propios con base en los censos nacionales de población.

Por muchas razones (CEPAL/CELADE, 2002), estos cambios pueden considerarse como una desactivación del riesgo sociodemográfico más citado en la literatura y en el discurso público, a saber, la presión sobre el presupuesto nacional que entraña el crecimiento rápido y sostenido de la población (Lipton, 1995; Mertens, 1995). Y aquello guarda especial relación con la reproducción de la pobreza. No parece haber dudas de que la atenuación del crecimiento demográfico libera recursos y que estos pueden redestinarse a otros propósitos directamente vinculados con el combate a la pobreza (expansión de la cobertura y/o mejoramiento de la calidad de servicios, prestaciones y transferencias de recursos y/o activos). Adicionalmente, al menos durante un período, la inercia demográfica se traducirá en una moderación del crecimiento de la población total pero con un sostenido incremento de la población en edad de trabajar. Esto, que se ha dado en denominar el bono demográfico, se expresa técnicamente en una gradual pero transitoria reducción de la dependencia demográfica. Por razones conceptuales y por la experiencia de algunos países europeos y asiáticos (Gráfico 2) ha sido considerado una ventana de oportunidades (BID, 2000), aunque su aprovechamiento está sujeto a factores no demográficos —en

rigor, depende de la compleja, y difícil manera de manejar la gama de fuerzas que actúan sobre la demanda de empleo—. De hecho, si estos factores no operan —y los altos índices de desempleo existentes en la región sugieren que este puede ser el caso— este supuesto «bono» no sólo se desaprovecha sino que deviene adverso.

Gráfico 2
América Latina y El Caribe, España y República de Corea:
Estimaciones y proyecciones del índice de dependencia demográfica, 1950-2050



Fuente: United Nations, 2001, Volumen I, Tabla A35.

En suma, a escala agregada, la extensión de la transición demográfica entre los países pobres de la región relaja una de las presiones históricas sobre la base de recursos y favorece la configuración de un escenario más propicio para la reducción de la pobreza. Ahora bien, la evidencia acumulada, en particular en los países de la región más avanzados en esta transición, sugiere que tal avance en modo alguno garantiza el éxito en la lucha contra la pobreza, es decir, pone de relieve las limitaciones que tiene el discurso y las intervenciones sociodemográficas más conocidas —en particular salud reproductiva y planificación familiar— en el plano de la reproducción de la pobreza. Pero esto último no debe resultar desconcertante y/o descorazonante. Por un lado, todas las políticas sociales incluso aquellas que inciden directamente sobre los activos más directamente ligados a la condición de pobreza—, han mostrado tener límites para abatir la pobreza, pues el flujo de ingresos de las personas y las familias depende crucialmente de variables macroeconómicas y laborales bastante autónomo de la política social. Por otro, la baja de la mortalidad y de la fecundidad es una conquista desde el punto de vista de los derechos de las personas.

Cuadro 2
América Latina y el Caribe:
Evolución del porcentaje de pobreza y de indicadores demográficos claves, 1980-2000

	Porcentaje de hogares pobres	Tasa de mortalidad infantil (por mil)	Esperanza de vida al nacer	Tasa global de fecundidad
1980	34,70	63,80	64,35	4,20
1990	41,00	44,40	67,85	3,20
2000	35,30	33,80	70,60	2,60
Periodo / Var %				
1980-1990	18,20	-30,40	5,40	-23,80
1990-2000	-13,90	-23,90	4,10	-18,80
1980-2000	1,70	-47,00	9,70	-38,10

Fuente: www.eclac.cl y www.eclac.cl/ceclade/ (estimaciones y proyecciones de población)

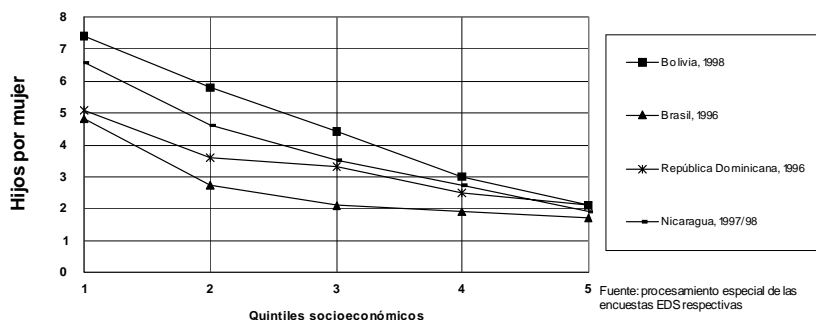
Ahora bien, los signos de avance transicional en los países pobres de la región no significan forzosamente que la dinámica demográfica de la pobreza esté cediendo. Esto último sólo puede verificarse con exámenes intranacionales según niveles de pobreza. Y estos muestran un panorama más variopinto. En la mayoría de los países la fecundidad y la mortalidad han tendido a bajar en todos los grupos sociales, es decir, los pobres también han sido beneficiados con la expansión de la expectativa de vida y el incremento del control sobre los procesos reproductivos (Cuadros 3 y 4). Esto sugiere que un conjunto de obstáculos demográficos para la acumulación de activos entre los pobres está perdiendo importancia. Sin embargo, en varios países el descenso de la fecundidad, e incluso de la mortalidad infantil —Bolivia y Haití—, entre los segmentos más postergados —sin educación— ha sido escaso (Cuadros 3 y 4). Pese a este panorama más heterogéneo, el camino abierto por los países que han logrado avances de la transición entre los grupos pobres es un precedente que permite abrigar la hipótesis de generalización del descenso sostenido de la fecundidad y la mortalidad en todos los grupos socioeconómicos. Tan o más importante, proporciona una sólida orientación de política en el sentido de perseverar con las intervenciones preventivas, que han mostrado ser exitosas previniendo muertes evitables y embarazos no deseados.

Por otra parte, los indicios de generalización socioeconómica de la transición demográfica no significan el logro de estándares aceptables en materia de sobrevivencia de los pobres; de hecho sus tasas son elevadas —sobre 50 por mil— con la excepción de algunos países como Chile, Costa Rica y Cuba. Tampoco implica necesariamente la reducción de las brechas de fecundidad y mortalidad entre grupos socioeconómicos, ya que estas dependen del ritmo de cambio de ambas variables entre los grupos socioeconómicos; en particular, cabe anotar que la persistencia de brechas en la fecundidad observada puede perder significación si las mujeres pobres logran sus ideales reproductivos y estos están acotados a un número compatible con un presupuesto familiar normal y un proceso normal de acumulación de activos por parte de los progenitores. Y precisamente con relación a esto último, el avance transicional a través de la estructura de estratos socioeconómicos no entraña forzosamente la atenuación de la fecundidad no deseada, pues esta depende de la evolución de las preferencias reproductivas. Más aun, la evidencia

disponible sugiere que incluso en los países en que la fecundidad ha bajado significativa y transversalmente la fecundidad no deseada persiste —como puede deducirse de la comparación entre fecundidad deseada y TGF en el Cuadro 3—, lo que revela la vigencia de este riesgo bajo distintos escenarios transicionales y los espacios existentes para la continuación del descenso de la fecundidad (CEPAL/CELADE, 2002).

En suma, hay signos de que en muchos países la dinámica demográfica de la pobreza sigue siendo la principal fuente de riesgos sociodemográfico. Sin embargo, los precedentes de avance transicional entre los grupos pobres sugieren que el aumento de la esperanza de vida y el control de la fecundidad pueden generalizarse incluso entre los pobres, poniendo en cuestión la vigencia de la dinámica demográfica de la pobreza. En un contexto tal ¿cabría pensar en el fin de la vulnerabilidad sociodemográfica o de los riesgos demográficos que contribuyen a la reproducción de la pobreza? Por las razones que se exponen a continuación la respuesta es negativa.

Gráfico 3
América Latina y el Caribe:
Tasa global de fecundidad según quintil socioeconómico, países y años seleccionados



Fuente: Procesamiento especial de las encuestas EDS

Cuadro 3
Evolución de la tasa global de fecundidad total y deseada según nivel de educación de la madre, países seleccionados de la región

	Sin educación		Educación primaria		Educación secundaria		Total	
	TGF deseada	TGF	TGF deseada	TGF	TGF deseada	TGF	TGF deseada	TGF
Bolivia 1989	3,4	6,4	3,1	6,0	2,3	3,3	2,7	5,0
Bolivia 1998	3,8	7,1	3,1	5,7	2,1	2,9	2,5	4,2
% de cambio	11,8	10,9	0,0	-5,0	-8,7	-12,1	-7,4	-16,0
Brasil 1986	3,2	6,2	2,4	3,6	1,8	2,0	2,3	3,4
Brasil 1996	2,7	4,9	2,1	3,3	1,7	2,1	1,8	2,5
% de cambio	-15,6	-21,0	-12,5	-8,3	-5,6	5,0	-21,7	-26,5
Colombia 1986	2,8	5,2	2,6	3,9	1,8	2,4	2,1	3,2
Colombia 2000	2,0	4,0	2,3	3,6	1,7	2,2	1,8	2,6
% de cambio	-28,6	-23,1	-11,5	-7,7	-5,6	-8,3	-14,3	-18,8
Guatemala 1987	5,7	6,8	3,9	5,1	2,4	2,7	4,4	5,5
Guatemala 1998/99	5,7	6,8	4,1	5,2	2,5	2,9	4,1	5,0
% de cambio	0,0	0,0	5,1	2,0	4,2	7,4	-6,8	-9,1
Haití 1994/95	4,0	6,1	3,1	4,8	1,8	2,5	3,0	4,8
Haití 2000	3,6	6,1	3,4	5,3	1,9	2,7	2,8	4,7
% de cambio	-10,0	0,0	9,7	10,4	5,6	8,0	-6,7	-2,1
Perú 1986	3,3	6,6	2,7	5,0	2,0	2,9	2,3	4,1
Perú 2000	3,0	5,1	2,3	4,1	1,6	2,2	1,8	2,8
% de cambio	-9,1	-22,7	-14,8	-18,0	-20,0	-24,1	-21,7	-31,7
República Dominicana 1986	3,5	5,2	2,9	4,2	2,4	2,7	2,6	3,7
República Dominicana 1996	3,1	5,0	2,8	3,7	2,1	2,5	2,5	3,2
% de cambio	-11,4	-3,8	-3,4	-11,9	-12,5	-7,4	-3,8	-13,5

Fuente: www.measuredhs.com

Cuadro 4
Evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI) y de la tasa de mortalidad en la infancia (TMEI) según nivel de educación de la madre, países seleccionados de la región

Países y años	Sin educación		Educación primaria		Educación secundaria		Total	
	TMI (1q0)	TMEI (5q0)	TMI (1q0)	TMEI (5q0)	TMI (1q0)	TMEI (5q0)	TMI (1q0)	TMEI (5q0)
Bolivia 1989	116,1	178,6	98,7	156,9	50,2	70,0	90,6	140,8
Bolivia 1998	112,5	153,9	86,6	116,4	41,3	54,1	73,5	99,1
% de cambio	-3,1	-13,8	-12,3	-25,8	-17,7	-22,7	-18,9	-29,6
Brasil 1986	113,2	136,3	89,1	100,4	23,1	26,8	84,0	96,2
Brasil 1996	93,2	119,1	58,1	67,0	32,0	37,0	48,1	56,7
% de cambio	-17,7	-12,6	-34,8	-33,3	38,5	38,1	-42,7	-41,1
Colombia 1986	49,3	71,5	42,0	55,6	28,6	30,6	38,7	50,0
Colombia 2000	42,3	43,7	28,2	32,8	19,6	22,5	24,4	28,0
% de cambio	-14,2	-38,9	-32,9	-41,0	-31,5	-26,5	-37,0	-44,0
Guatemala 1987	82,9	137,0	80,1	109,3	41,8	43,8	79,2	120,1
Guatemala 1998/99	55,7	78,5	46,5	60,0	41,1	42,3	49,1	64,6
% de cambio	-32,8	-42,7	-41,9	-45,1	-1,7	-3,4	-38,0	-46,2
Haití 1994/95	95,2	157,6	78,4	126,1	75,6	94,0	87,1	140,6
Haití 2000	90,9	150,5	97,5	140,3	55,9	74,0	89,4	137,7
% de cambio	-4,5	-4,5	24,4	11,3	-26,1	-21,3	2,6	-2,1
Perú 1986	118,8	169,4	88,3	132,6	41,5	52,6	79,1	114,7
Perú 2000	73,4	106,0	53,5	76,4	27,4	35,1	43,2	60,4
% de cambio	-38,2	-37,4	-39,4	-42,4	-34,0	-33,3	-45,4	-47,3
República Dominicana 1986	96,1	137,5	73,7	95,5	47,5	60,8	70,1	92,1
República Dominicana 1996	84,7	120,2	53,8	67,2	29,3	31,8	48,6	61,0
% de cambio	-11,9	-12,6	-27,0	-29,6	-38,3	-47,7	-30,7	-33,8

Fuente: www.measuredhs.com

B. Los dilemas de la fecundidad adolescente

Existe consenso en que la fecundidad durante la adolescencia tiene consecuencias adversas para todos los involucrados. Los progenitores se ven en la necesidad de asumir roles para los cuales aún no están preparados—social, financiera, psicológica e incluso fisiológicamente— e improvisar decisiones y cancelar opciones, todo lo cual va en desmedro de su trayectoria vital y pone en jaque la estabilidad de la pareja y el proceso de crianza de los/las hijos/as. La familia de estos progenitores adolescentes en su calidad de principal institución de apoyo debe transferir o compartir recursos con ellos. La comunidad experimenta la salida del sistema educativo de recursos humanos que debieran estar en pleno proceso de formación. Si bien hay situaciones en las que por diversos factores—dependientes de la edad de la madre, de rasgos de personalidad o del contexto sociocultural (cuando la fecundidad adolescente es una conducta altamente valorada por la comunidad)—, estas adversidades pueden atenuarse, existe acuerdo generalizado en que la reproducción durante la adolescencia debe evitarse (CEPAL, 2001a; Guzmán y otros, 2001; CEPAL/CELADE, 1998).

La fecundidad adolescente adquiere mayor importancia aun, porque ha caído bastante menos que la del resto de las edades. Incluso más, hay evidencia de que en algunos países la maternidad adolescente habría aumentado en los últimos 15 años, lo que ciertamente contrasta con el sostenido descenso de la fecundidad descrito en el acápite previo (Cuadro 5). Aquello también se aprecia en la comparación de trayectorias reproductivas en países en los que el descenso de la fecundidad ha sido acelerado, como Colombia, donde la paridez acumulada a las edades mayores ha caído significativamente no así la acumulada durante la adolescencia (Gráfico 6).

La fecundidad adolescente, y en general la nupcialidad temprana (CEPAL/CELADE, 2002; Guzmán, Hakkert y Contreras, 2001), son más frecuentes entre los pobres (Gráfico 7), al punto que pueden considerarse componentes de la dinámica demográfica de la pobreza. Por lo mismo, parte del predicamento esbozado en el acápite previo sobre la moderación de la dinámica demográfica de la pobreza pierde fortaleza, pues al menos una de sus dimensiones es pertinaz. Adicionalmente, como los progenitores adolescentes pobres y sus familias no tienen recursos acumulados para solventar la crianza, sus opciones son pocas y ninguna de ellas muy alentadora: ingresan a la fuerza de trabajo —lo que dificulta su proceso formativo—, redistribuyen responsabilidades a través de sus redes de apoyo —normalmente sus familiares— o rehuyen sus obligaciones —lo que, usualmente, termina afectando, además del/la niño/a, a la madre adolescente o a las abuelas—. De hecho, los sesgos de género de la fecundidad adolescente son significativos. Amén de la paradoja de que la edad mediana de la iniciación sexual es menor entre los hombres, pero la edad mediana a la que se tiene el primer hijo es menor entre las mujeres —lo que revela una actividad sexual más protegida (o tal renegadora de sus resultado) entre los hombres—, la evidencia sugiere que la irresponsabilidad masculina es preocupante en el plano de los embarazos adolescentes; peor aun, hay signos de aumento de la proporción de madres adolescentes sin pareja (CEPAL/CELADE, 2002).

La fecundidad adolescente tiene especificidades que la hacen merecedora de políticas particulares (CEPAL/CELADE, 2002; CEPAL, 2001a y 2001b; UNFPA, 1998). A diferencia de la fecundidad total, el nivel de desarrollo de los países tiene una correlación más bien débil con el nivel de la fecundidad adolescente, lo que no impide que dentro de los países los segmentos más pobres registren los mayores índices de reproducción precoz (CEPAL/CELADE, 2002; CEPAL, 2001a). Más importante aun, su nivel tiene una relación no significativa con el uso de anticonceptivos entre adolescente a escala nacional, lo que contrasta con la fuerte relación que tiene la prevalencia de uso de anticonceptivos con la fecundidad total.⁷ Ello significa que parte del equipamiento, recursos humanos y conocimientos usados para prevenir embarazos no deseados en otras edades sean inoperantes entre las adolescentes y que sea necesario diseñar estrategias de intervención ad-hoc para ellas.

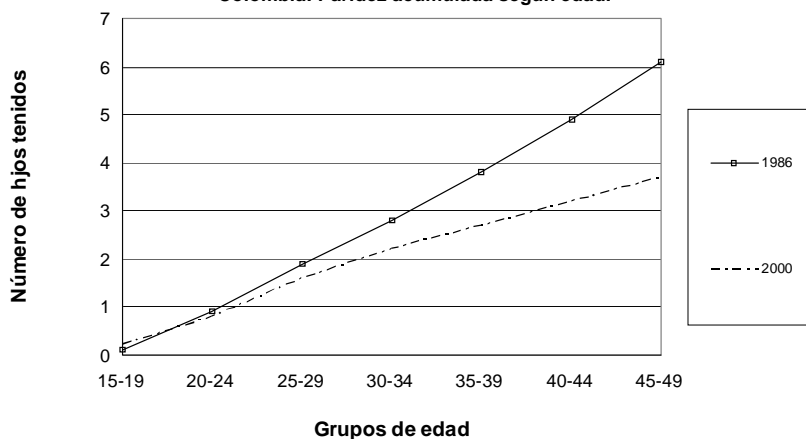
⁷ Una regresión por MCO entre la tasa de fecundidad adolescente y la prevalencia de uso de anticonceptivos modernos entre las adolescentes en los países de la región tenía un R^2 de 5.8% en el decenio de 1980 y de 0.1% en el de 1990. Para la TGF y la prevalencia de uso de anticonceptivos modernos entre las mujeres en edad fértil el R^2 era de 56% en el decenio de 1980 y 72% en el de 1990 (CEPAL/CELADE, 2002).

Cuadro 5
Evolución de la maternidad antes de los 20 años,
países seleccionados de la región.

	Madres	Primer embarazo	Total Madres en su primer embarazo
Bolivia 1989	14,6	2,6	17,2
Bolivia 1998	11,5	2,3	13,7
Brasil 1986	10,4	2,9	13,3
Brasil 1996	14,3	3,7	18,0
Colombia 1986	10,5	3,1	13,6
Colombia 2000	15,1	4,0	19,1
Guatemala 1987	19,7	3,0	22,8
Guatemala 1998/99	17,3	4,3	21,6
Haití 1994/95	10,8	3,6	14,5
Haití 2000	13,6	4,4	18,0
Perú 1986	10,8	1,9	12,7
Perú 2000	10,7	2,3	13,0
República Dominicana 1986	13,9	3,5	17,4
República Dominicana 1996	18,3	4,3	22,7

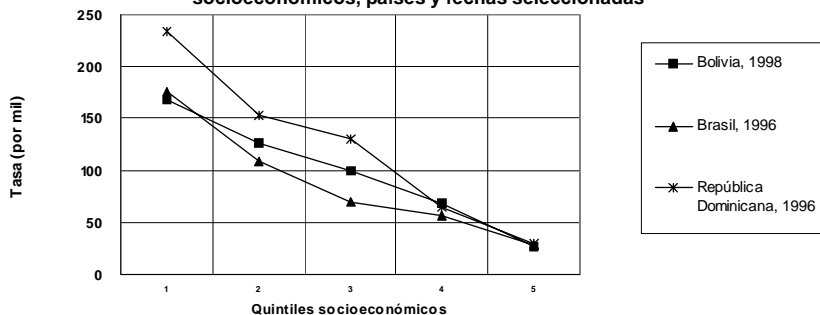
Fuente: www.measuredhs.com

Gráfico 6
Colombia: Paridez acumulada según edad.



Fuente: www.measuredhs.com

Gráfico 7
América Latina y El Caribe: Tasas de fecundidad adolescente, según quintiles socioeconómicos, países y fechas seleccionadas



Fuente: Procesamientos especiales de las encuestas EDS.

Un hallazgo sobre el cual se han acumulado numerosos indicios empíricos (CEPAL/CELADE, 2002; Guzmán, Hakkert y Contreras, 2001) es la existencia de distinciones dentro de la fecundidad adolescente. De una parte está aquella asociada a una trayectoria reproductiva intensa y unión temprana, que suele presentarse en segmentos pobres y/o socioculturalmente excluidos. De otra parte se halla aquella que está desvinculada de la trayectoria reproductiva posterior y que tiene más probabilidades de darse al margen de una unión estable. Esta última se subdivide, a su vez, en aquella que responde a un patrón de comportamiento sexual más «liberal» —es decir sin propósitos reproductivos y fuera del matrimonio— que no va acompañado de conductas e intervenciones preventivas eficientes y aquella que parece ser el resultado de la falta de opciones, principalmente entre las jóvenes populares urbanas, que ven en la maternidad un proyecto personal o un espacio de realización. Estas distinciones son altamente informativas respecto de las especificidades de la fecundidad adolescente antes comentadas y sobre todo en términos de política, pues como se ha destacado recientemente (CEPAL/CELADE, 2002), ameritan tratamientos e intervenciones diferenciadas.

En todo caso, cualquiera sea la naturaleza o tipo de la fecundidad adolescente, en una sociedad moderna no hay espacio para ser condescendientes con ella y la prevención es la opción de política prioritaria, en particular entre los pobres, lo que exige una intervención simultánea de apertura de opciones, formación y sensibilización y habilitación para el manejo de sus comportamientos sexuales y reproductivos. A lo anterior cabe añadir una acción decidida para responder a la materialización de este riesgo, pues las adolescentes que quedan embarazadas deben recibir una asistencia especial que, sin inducir o promover tal comportamiento, morigere su impacto.

C. El envejecimiento: desafío de alta complejidad

Se trata del riesgo sociodemográfico que se perfila más sólidamente a futuro, pues tanto por la experiencia internacional —que muestra que una vez iniciado registra un avance sostenido e inexorable— como por su alto grado de inercia —los adultos mayores del futuro ya nacieron; lo hicieron bajo un patrón de fecundidad alta hasta el decenio de 1970 y, además, se han beneficiado de las reducciones de la mortalidad logradas en los últimos 70 años— el aumento de la cantidad y de la proporción de adultos mayores será rápido y aparentemente inevitable. Paradójicamente lo promueve el avance de la transición demográfica, que anteriormente se había presentado como un proceso esencialmente atenuador de riesgos sociodemográficos.

Por cierto, considerar el envejecimiento como un riesgo es discutible, pero aquello es, en rigor inherente a todos los riesgos sociodemográficos con excepción de los que atañen a la morbimortalidad o al ejercicio de derechos. Sus consecuencias potencialmente adversas se hacen sentir sobre las variables económicas —como la demanda agregada, el ahorro y la competitividad—, las finanzas públicas —en particular en las esferas de la salud y la seguridad social—, el perfil epidemiológico —que adquiere mayor complejidad— y la estructura social —que puede perder flexibilidad— (CEPAL/CELADE, 2000). Algunas de estas consecuencias son evidentes y otras son más bien hipotéticas y difíciles de evaluar, pues el envejecimiento demográfico es una condición nueva en la historia (CEPAL/CELADE, 2002). En cualquier caso, la inexistencia de precedentes exitosos de tal manejo hace depender el enfrentamiento de las adversidades que entraña de la capacidad de respuesta y de la habilidad adaptativa que desarrollen las comunidades nacionales.

Una distinción relevante es la que hay entre envejecimiento de comunidades —incluyendo países—, hogares y personas. Aunque interrelacionados, difieren entre sí. En las unidades domésticas, el efecto de los determinantes básicos —la fecundidad y la mortalidad— se combinan con el de la coresidencia familiar; en los individuos, la única variable relevante es la mortalidad. En ambos casos, las adversidades que impone el envejecimiento se vinculan con la pérdida de fuentes de recursos —como el trabajo, las redes familiares y los contactos sociales— y el deterioro físico y mental en etapas posteriores de la vida. La evidencia sugiere que el envejecimiento de los hogares y de los individuos también está generalizándose en la región; la proporción de hogares en que residen sólo personas mayores está en aumento y es claramente mayor en los países más avanzados en la transición demográfica. Aunque en estos países hay una sobre representación de hogares unipersonales de adultos mayores, la mayoría todavía participa de arreglos domésticos más amplios, revelando el persistente papel de la familia —no exento de dificultades— para la inserción social y atención de los ancianos. De otra parte, como la esperanza de vida a la edad exacta 60 años ha aumentado considerablemente en todos los países de la región, el envejecimiento individual se expresa simultáneamente en la extensión de la longevidad —lo que introduce el tema de la denominada «cuarta edad»— y en una creciente cantidad de personas adultas mayores.

Ahora bien, una inspección preliminar de las cifras actuales podría sugerir que el envejecimiento tiene una relación distante con la pobreza. Esto porque: (a) los países más

envejecidos de la región son los que ostentan mayores niveles de desarrollo socioeconómico (Gráfico 8) y una institucionalidad más sólida para atender los requerimientos de los adultos mayores (CEPAL/CELADE, 2002); y (b) los adultos mayores son uno de los grupos de edad con menores índices de pobreza y, en general, los hogares constituidos sólo por adultos mayores tienen niveles de pobreza netamente inferiores a los promedios (Cuadro 6).

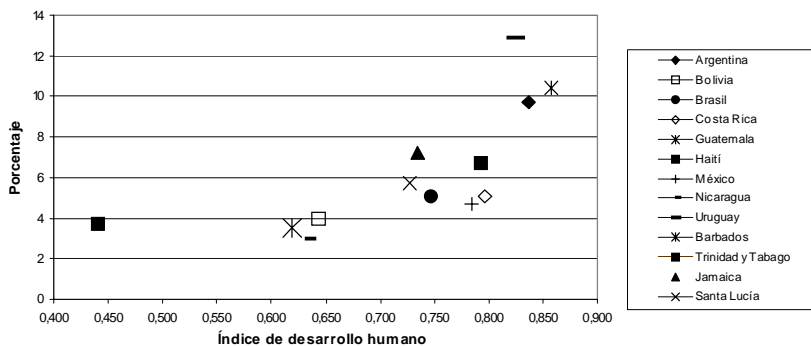
Sin embargo, ambas apreciaciones dependen críticamente del corte transversal del análisis. Si se considerase una perspectiva más dinámica las conclusiones serían distintas.

Primero, las condiciones socioeconómicas relevantes serían las de países con niveles de envejecimiento avanzado. Y en su gran mayoría estos tienen índices de desarrollo muy superiores a los regionales. Por ende, los recursos con los que cuentan para encarar el envejecimiento son significativamente mayores. De hecho, el envejecimiento latinoamericano será el primero en producirse bajo condiciones de subdesarrollo, económico, social e institucional. De esta manera, mientras la transición demográfica puede entrañar el ahorro de recursos, que a su vez pueden tener como destino el combate a la pobreza, un subproducto de esta transición, el envejecimiento, tenderá a convertirse en una fuente de presión sobre los recursos públicos y domésticos que podría erosionar, en algún grado, los programas de combate a la pobreza.

Segundo, hay una alta probabilidad de que las cohortes que engrosarán la población adulta mayor en las décadas venideras tengan una composición socioeconómica diferente de las que actualmente conforman la tercera edad. Esto porque el aumento de la esperanza de vida, de una manera similar a lo ya mostrado con la mortalidad infantil, ha beneficiado a todos los grupos sociales. Así, más personas que han experimentado una trayectoria vital bajo condiciones de pobreza llegarán a ser adultos mayores. Y, entonces, los niveles de pobreza prevalecientes entre los adultos mayores pueden comenzar a aumentar. Más aun, dos tendencias simultáneas que han operado en la región se conjugan para abrir interrogantes respecto del grado de protección que tendrán los ancianos del futuro. De una parte está la creciente importancia de la acumulación en fondos individuales como seguro durante la vejez (CEPAL, 2000b). Esto hace que la situación socioeconómica durante la adultez mayor esté virtualmente determinada por el ahorro personal previo, y la capacidad de ahorro de los pobres es baja —cuando la tienen—; más aun con frecuencia están al margen de los sistemas formales de ahorro para la vejez y no tienen incentivos o capacidad para ahorrar de manera independiente. Por otra parte, están los cambios en el mundo del trabajo que en la región se han manifestado en un desempleo mayor y una extensión de las actividades informales. Ambos fenómenos entrañan debilitamiento o ausencia de acumulación institucional para la vejez. **En suma, hay elementos para considerar al envejecimiento como un riesgo que puede tener un efecto poderoso sobre la reproducción de la pobreza, y frente al cual, los mecanismos antiguos y nuevos de protección tienen falencias, incertidumbres y sesgos socioeconómicos y de género (Guzmán, 2002).**

Gráfico 8

América latina y el Caribe: Porcentaje de la población con 65 y más años y valor de Índice de Desarrollo Humano al año 2000, países seleccionados.



Fuente: www.undp.org/hdro/highlights/statistics.html, Tabla 04 (sept. 26) y United Nations, 2001

Cuadro 6

América Latina y el Caribe, países seleccionados: incidencia de la pobreza en los hogares según residencia de adultos mayores por zonas urbanas y rurales, 1997

País	Zonas urbanas				Zonas rurales			
	Sólo adultos mayores	Con adultos mayores	Sin adultos mayores	Total	Sólo adultos mayores	Con adultos mayores	Sin adultos mayores	Total
Argentina	11	14	12	12	63	79	72	72
Bolivia	33	43	49	47	5	28	55	46
Brasil	5	21	29	25	5	19	32	26
Chile	6	13	22	19	5	19	32	26
Colombia	31	38	40	40	47	55	54	54
Costa Rica	20	18	16	17	43	27		
Ecuador	37	50	51	50	20		23	
El Salvador	35	44	37	39	42	62	63	62
Honduras	63	71	66	67	61	80	81	80
Nicaragua	46	71	66	66				
México	17	43	38	38	32	57	55	54
Panamá	18	23	26	25	25	33	35	34
Paraguay	36	38	40	40				
República Dominicana	34	37	30	32	19	37	33	34
Venezuela b/	28	41	43	42				
Uruguay	0	5	9	6				

Fuente: CEPAL, 2000.

D. Concentración en la ciudad y dispersión de la pobreza en el campo

La transición urbana y el efecto solapado pero efectivo de la transición demográfica han modificado significativamente el panorama de riesgos de tipo macro vinculados a la localización de la población en el espacio; en particular, el ritmo de crecimiento de la población urbana se hace cada vez menos amenazante, aunque puede seguir excesivamente intenso en ámbitos específicos (Pinto da Cunha, 2002; CEPAL/HABITAT, 2001). Por otra parte, a escala micro, la incorporación de los migrantes rurales se torna menos traumática, pues junto al descenso de su cuantía relativa, la mayor exposición a pautas de conducta, conocimientos y actividades propias del medio urbano—fruto de la urbanización y de la diseminación de la «cultura» urbana por los medios de comunicación masivos—hace menos ostensibles sus rezagos socioculturales.

No obstante, hay al menos tres líneas argumentales con su respectiva evidencia de apoyo, que sugieren un persistente papel de la localización y la movilidad espacial en la reproducción de la pobreza.

El primero, remite a los reiterados episodios de eventos naturales que causan pérdidas humanas y materiales (Caballero y Zapata, 2000). Con frecuencia, los ámbitos más expuestos a estas amenazas suelen ser ocupados por los pobres, pues por dicha condición de riesgo ambiental su precio es más bajo. A veces los pobres se ven empujados hacia dicho espacios. Adicionalmente, cuando el evento ambiental se abate sobre una zona socio-económicamente mixta, los más afectados suelen ser los pobres, sea por la menor calidad de sus viviendas, por la irregularidad de sus construcciones o por la falta de equipamiento adecuado en las zonas en que residen. En ocasiones, la ciudades tienen un diseño tal que conduce los efectos de los eventos ambientales hacia las zonas pobres (típicamente las inundaciones).

El segundo, refiere a la concentración de los pobres en las ciudades. No se trata del efecto estadístico que deriva de la urbanización y que hace que la mayor parte de la población pobre resida actualmente en ciudades. Se trata de la agrupación de los pobres dentro de las ciudades. Aquello—que en rigor no es novedoso y que históricamente se ha conocido como segregación residencial—, ha adquirido una relevancia emergente en la actualidad (Rodríguez, 2001). Cabe destacar que su importancia no deriva forzosamente de que esté aumentando; de hecho, hay una amplia discusión en la actualidad respecto de su evolución en las ciudades de la región.⁸ Su relevancia se origina en las numerosas y complejas adversidades que produce y que abonan a la reproducción de la pobreza (Sabatini, 2001).⁹ Primero, dificulta la interacción entre grupos socioeconómicos y redunda

⁸ Hay debate sobre la intensidad y las tendencias de la segregación residencial. Algunos especialistas afirman que en América Latina no parece tan aguda como en los Estados Unidos y que las ciudades de algunos países multiétnicos se destacan por la heterogeneidad racial de sus vecindarios. Otros investigadores indican que la segregación residencial socioeconómica parece estar aumentando en algunas ciudades. Finalmente algunos especialistas subrayan que se ha producido una intensificación de la segregación pero que su escala ha tendido a reducirse (CEPAL/CELADE, 2002).

⁹ Esto con independencia de que también pueda tener algún grado de funcionalidad (por agrupación en virtud de afinidad) o que sea un resultado esperado de la libre operación de las fuerzas del mercado en zonas urbanas.

en el «aislamiento de los pobres» en un contexto cotidiano de pares; ello estrecha sus contactos y probabilidades de exposición a algunos de los códigos, mensajes y conductas funcionales para un desempeño social moderno (Katzman, 2001). Segundo, acentúa las deficiencias de las jurisdicciones donde habitan los pobres, pues implica un exiguo flujo de recursos para las administraciones locales —cada vez más relevantes en lo que a ofrecimiento de servicios y formación de activos refiere—, habida cuenta de la base territorial del financiamiento local (Finot, 2001).¹⁰ Tercero, la agrupación geográfica de los pobres genera externalidades negativas que se expresan en el hecho de que los ingresos de los hogares y personas de condiciones similares dependen de si residen en áreas pobres o no pobres (Easterly y Levine, 2001, p. 202) o que la probabilidad de ser objeto de actos violentos sea mucho mayor en comunidades pobres segregadas (Massey, 2002). Cuarto, la segregación opera de una forma particularmente perversa en la región, pues tiende a concentrar a los grupos pobres en áreas periféricas, mal equipadas, poco accesibles y con frecuencias más expuestas a riesgos ambientales. A toda esta suma de adversidades se le añade el debilitamiento de los espacios públicos y en particular la erosión de la función integradora del sistema escolar, habida cuenta de la creciente segmentación educativa¹¹ (CEPAL, 2000b). Cabe destacar que aunque se trata de un tema escasamente estudiado en la región, avances iniciales de una investigación en curso sugieren que la migración intrametropolitana tiende a incrementar la segregación residencial, aun cuando no forzadamente a reforzar las áreas de localización tradicional de ricos y pobres (CELADE, 2002).

Finalmente, el asentamiento rural muestra altos niveles de dispersión. Una fracción importante de la población del campo se disemina entre pequeñas localidades, cuyo número puede variar considerablemente en corto tiempo¹², lo que es indicio de una intensa movilidad territorial y del imperio de fuerzas de desarraigo, realizadas por la precariedad de su situación socioeconómica (CEPAL/HABITAT, 2001; Rubalcava, 2001). La dispersión rural entraña las adversidades propias de una localización distante, en términos geográficos

¹⁰ Por cierto esto puede ser neutralizado mediante mecanismos de redistribución, de transferencias o de desterritorialización del financiamiento local. Sin embargo, la experiencia sugiere que aun operando mecanismos de este tipo, la segregación genera un cuadro financiero altamente complejo para las jurisdicciones pobres.

¹¹ «En una sociedad altamente segmentada, la educación también es un instrumento de segmentación» (Ocampo, 2001, p. 16). La evidencia indica una estrecha relación entre el nivel socioeconómico del niño, el del establecimiento educacional y su desempeño académico (CEPAL, 2000b, p. 117). La salida de los grupos de ingresos altos y medios altos del sistema público de educación agudiza el deterioro cualitativo de la enseñanza en estos establecimientos, que se circunscriben a un alumnado de grupos socioeconómicos bajos y medios bajos.

¹² En México, el censo realizado en 1995 identificó un número de localidades pequeñas y aisladas mayor que el censo levantado cinco años antes (Ruvalcaba, 2001).

¹³ Como muchos otros riesgos, la dispersión tiene como contracara aspectos potencialmente positivos, pues en las zonas rurales de baja densidad es menos frecuente la fragmentación excesiva del suelo y la sobreexplotación de la base de recursos naturales; en cambio, las altas densidades rurales, como las que se registran en El Salvador o Jamaica, se asocian a elevadas tasas de deforestación (CEPAL/CELADE, 1995).

y socioculturales, de los centros de producción, comercialización, toma de decisiones y ofrecimiento de servicios, por lo que representa «uno de los problemas más desafiantes para la política social» (CONAPO, 1999, p. 112)¹³ El mejoramiento de la accesibilidad de estas comunidades y el suministro de servicios básicos a la población dispersa exige cuantiosas inversiones, que los gobiernos nacionales y locales, afectados por restricciones financieras rara vez están en condiciones de enfrentar. A la postre, la dispersión actúa como una fuerza que promueve la reproducción de la pobreza entre los habitantes rurales.

E. Estructuración familiar: fuente de protección, selectividad de las uniones e inestabilidad

No obstante su pérdida de importancia como instancia de producción económica, la familia sigue desempeñando un papel crucial en tanto agente de la reproducción social. Por lo mismo, la familia y su expresión doméstica y estadística: el hogar desempeña un papel fundamental en la reproducción de la pobreza. Actúa como institución formadora, transmite activos y posiciona socialmente. Adicionalmente, en su seno se adoptan decisiones, o simplemente se experimentan eventos, que marcarán el resto del curso de vida de las personas. Por ejemplo, aquellas relacionadas con la salud durante la infancia o con la incorporación al sistema escolar. Por último, tienen funciones de protección, apoyo, solidaridad y seguridad, aunque el cumplimiento de tales funciones es contingente en la vida real de los individuos. La visión anterior choca —al menos parcialmente— con la realidad de muchas familias en las que: (a) predomina el conflicto y/o la violencia; (b) no hay recursos para afrontar la vida cotidiana, la crianza, la formación y/o el cuidado de sus miembros; (c) hay escasas capacidades para motivar, estimular y potenciar a sus integrantes; (d) hay inestabilidad, falta de compromiso o fracturas consolidadas; y (e) hay asimetrías de género y generacionales que significan desmedro para mujeres, niños y ancianos.

Habida cuenta de esta amplia gama de posibilidades, ¿qué pasa con la familia de los pobres? Sin pretender una respuesta cabal, varios hechos estilizados conducen a pensar que aquella experimenta un conjunto de restricciones y desventajas que actúan contribuyendo a la reproducción de la pobreza.

Algunos de estos hechos ya han sido destacados, en particular la alta y temprana fecundidad de los pobres, lo que significa familias con apreturas financieras —se parte de la base que el presupuesto doméstico de los pobres es exiguo— o que se forman de manera apresurada y con escasa acumulación de activos y de patrimonio. Pero otros no han sido abordados hasta el momento. Se trata de (a) la fragilidad familiar y sus sesgos de género; y (b) la selectividad conyugal.

La fragilidad familiar tiene muchas caras. Una de ellas es la disolución de uniones por acuerdo, imposición o abandono; aunque existe escasa investigación comparable sobre sus consecuencias en la región, en los países desarrollados la evidencia indica que tienen un impacto económico desfavorable, sobre todo para mujeres y niños (CEPAL/CELADE, 2002). Otra es la conformación de uniones inestables en el marco de las cuales suele

ocurrir reproducción biológica pero con compromisos muy asimétricos en materia de crianza y vida doméstica. Otra es la constitución de uniones irregulares, donde son frecuentes los episodios fisura/reagrupamiento. Finalmente, existe un grupo numeroso de uniones consensuales que si bien pueden ser duraderas, estables y socialmente reconocidas, carecen de sanción formal, lo que suele ser un factor de exclusión de derechos, políticas y beneficios. En América Latina y el Caribe la inestabilidad familiar así como las uniones consensuales han sido históricamente frecuentes, aunque sus índices varían ampliamente entre y dentro de los países. Cálculos recientes muestran que en países como El Salvador, República Dominicana y Colombia, más del 20% de las mujeres de 45 a 49 años estaba separada o divorciada a fines del decenio de 1990 (CEPAL/CELADE, 2002). Entre tanto, los resultados de estimaciones nacionales sugieren que el divorcio está en aumento en la región, lo que si bien tienen interpretaciones distintas y desde luego no sugiere una acción de política directa, lo que incrementaría la visibilidad y relevancia de este evento, que como se ha subrayado, tiene características de shock para los hogares. En general, la evidencia sugiere que los hogares pobres de la región tienen mayores índices de fragilidad familiar, tanto por una frecuencia relativa de uniones consensuales más alta como por mayor prevalencia del abandono y por ende de la crianza monoparental. Cabe anotar, en todo caso, que este patrón de comportamiento tiene raíces culturales poderosas por lo que en algunos países no opera, como tampoco lo hace dentro de ciertos segmentos pobres; por ejemplo: algunas comunidades indígenas. En todo caso se trata de un patrón desvinculado de la fragilidad familiar moderna asociada a la denominada «segunda transición demográfica» (CEPAL/CELADE, 2002; Van de Kaa, 2001). En tal sentido, lejos de reflejar un cambio de las relaciones asimétricas de género significa un abierto desmedro para las mujeres.

Cuadro 7
América Latina y el Caribe, países seleccionados: porcentaje de hogares en que jefe de hogar y cónyuge tienen un mismo nivel de educación ^{a,b}

PAÍS	AÑO	PORCENTAJE
Chile	1992	61,7
Ecuador	1990	62,1
Guatemala	1994	63,2
México	2000	61,2
Nicaragua	1995	58,4
Panamá	2000	60,0
Perú	1993	62,3
Uruguay	1995	73,8

Fuente: procesamiento especial con REDATAM de las bases de microdatos censales respectivas.

^a Excluye hogares sin cónyuge del jefe.

^b Los niveles educativos son: sin educación, educación primaria (completa o no), educación secundaria (completa o no), estudios superiores.

Por otra parte, no hay duda de que los recursos económicos con que cuentan los hogares influyen de manera decisiva en la crianza de la prole. Pero cada vez más se destaca que las condiciones socioeconómicas de los hogares no se limitan a los ingresos; varias investigaciones realizadas en los últimos quince años muestran la relevancia del clima

educativo del hogar —que depende del nivel educativo de los progenitores o adultos residentes en el hogar— para el desarrollo de las habilidades cognitivas y el logro de buenos rendimientos escolares de los niños y concluyen que *«el clima educacional del hogar es aún más determinante del nivel de educación de los hijos que el ingreso familiar»* (CEPAL, 2000c, p. 104). A la luz de la reconocida desigualdad regional en materia de distribución de activos —patrimonio, ingresos, capital humano o contactos—, ambas conclusiones implican que la mayoría de los factores definitorios de la formación de los recursos humanos y de ciudadanos se reparten de manera muy inequitativa entre familias y hogares, coadyuvando a la reproducción de las desigualdades y a la mantención de la pobreza. Y entre los factores que modelan este escenario de profundas desigualdades entre familias y hogares, la selectividad conyugal desempeña un papel crucial aunque aún insuficientemente reconocido (CEPAL/CELADE, 2002; Attanasio y Székely, 1999). Tal como lo muestra el Cuadro 7, se precisa que prácticamente en todos los países de la región dos de cada tres parejas están formadas por personas con el mismo nivel educativo. Si bien esta regularidad puede tener interpretaciones contrapuestas —afinidad v/s discriminación), —su efecto práctico y objetivo es que existe una tendencia socialmente estructurada a que las uniones sean integradas por «iguales». Es decir, las ya marcadas inequidades socioeconómicas entre las personas se ven agudizadas por la conformación de los hogares, lo que sienta las bases para la transmisión intergeneracional de las desigualdades. La unión conyugal está lejos de ser una alternativa para incrementar la dotación de activos de las personas de la región.

Las observaciones precedentes dan lugar a tres conclusiones. La primera, es que la valoración y funcionalidad práctica de la familia en materia de protección y desarrollo de sus miembros no debe dar pábulo para una imagen mítica de su pasado o a una visión idealizada de su presente. En particular, la alta valoración que tiene en la región no debe oscurecer las inequidades que la marcan desde su génesis, su secular condición de inestabilidad y sus limitaciones objetivas e idiosincrásicas. La segunda conclusión, es que el reconocimiento de su calidad de institución de respaldo en última instancia no significa que la familia esté en condiciones de asumir funciones de protección, formación y promoción que cumplen otras instancias sociales como el Estado. Por lo mismo, la transferencia unilateral de tareas de esta índole a la familia —sea en virtud de decisiones políticas o de circunstancias prácticas—, incluso si incluye la asignación de recursos adicionales, entraña una gran incertidumbre. La tercera conclusión, es que las permanentes adaptaciones de la familia, en particular su diversidad de estructuras y modalidades, obligan a contextualizar su análisis y a obviar las aseveraciones genéricas. Un ejemplo claro de ello son las diferentes implicaciones culturales y prácticas de la consensualidad como arreglo nupcial en diversos contextos: la inexistencia de formalidades administrativas tiene poco que ver con la estabilidad de la unión en varias comunidades indígenas; la unión libre entre los grupos populares urbanos, en cambio, suele ser un signo de precariedad, exclusión y, en general, de fragilidad; por último, en algunos ámbitos modernos liberales, la cohabitación puede reemplazar al matrimonio como núcleo básico de reproducción y crianza o ser un período de prueba —social y hasta institucionalmente reconocido— previo a la formalización del vínculo.

III. Actuando sobre la vulnerabilidad sociodemográfica

A. Orientaciones generales.

¿Cómo pueden enfrentar las comunidades, hogares y personas la vulnerabilidad sociodemográfica?

Primero, tomando conciencia de que esta vulnerabilidad existe, de que las tendencias demográficas en curso no la agotan, sino que la transforman, y de que es importante porque limita el ejercicio de derechos y el desarrollo de los proyectos colectivos, domésticos e individuales.

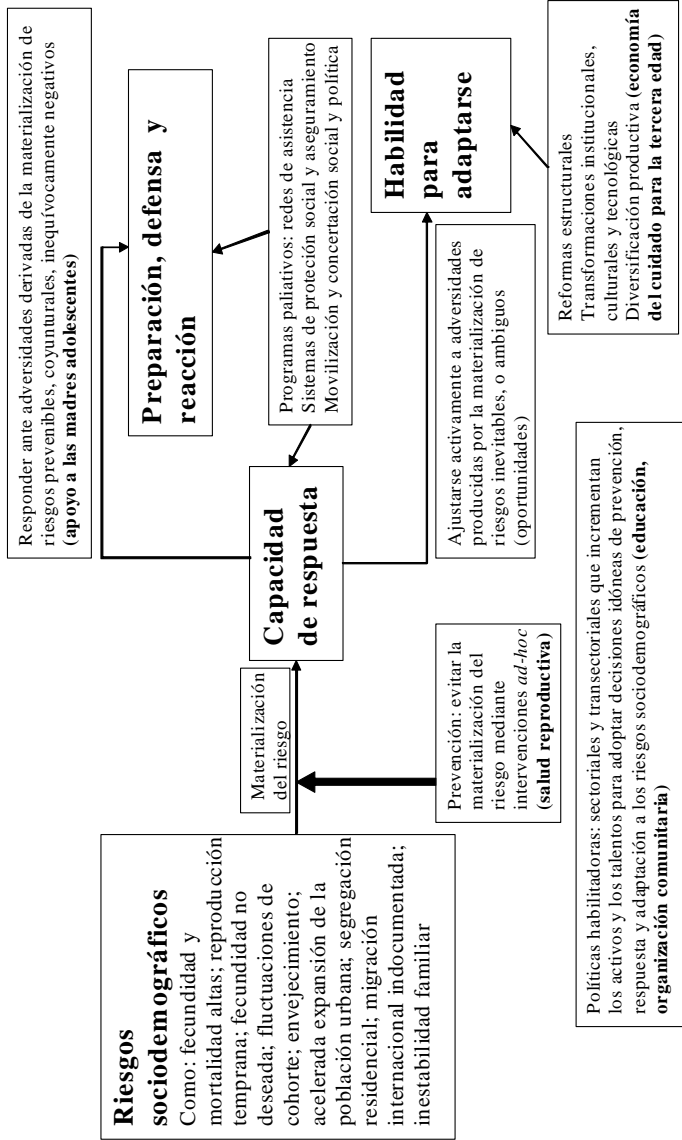
Segundo, entendiendo que la temporalidad extendida de los procesos demográficos da un margen de predictibilidad de los grandes cambios —lo que se presta para anticipar escenarios— y abre la posibilidad de realizar intervenciones tempranas para impedir que las adversidades se consoliden; es necesario sensibilizar a los tomadores de decisiones respecto de esta ventaja de aprovechar el largo plazo de una manera oportuna, puesto que la dinámica de algunos riesgos demográficos tienen un fuerte componente de inercia, de modo que si no se actúa tempranamente será forzoso desplegar esfuerzos mucho mayores.

Tercero, advirtiendo que varias de las medidas que se orientan a reducir la vulnerabilidad sociodemográfica pueden redundar en ganancias para todos los actores involucrados (*win-win policies*), aunque parte de sus dividendos serán contingentes y dependerán del concurso de otras políticas.

Cuarto, reconociendo que el campo de intervención puede abarcar tres frentes (véase Diagrama 1): (a) la prevención, que significa tratar de evitar la materialización del riesgo; (b) el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, que significa reaccionar una vez que las adversidades del riesgo se han hecho presentes, y (c) el mejoramiento de las habilidades adaptativas, que significa efectuar cambios endógenos para ajustarse activamente al escenario que resulta de la materialización del riesgo.

Para prevenir los riesgos sociodemográficos considerados en los acápite previos del documento hay un repertorio de políticas y acciones posibles que dependen, entre otras cosas, del tipo de riesgo que se intente prevenir. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los actores frente a las consecuencias adversas que entraña la materialización de tales riesgos, puede lograrse mediante políticas anticipatorias, intervenciones paliativas y estrategias defensivas, que pueden o no ser objeto de promoción pública. Mejorar la capacidad adaptativa supone una evaluación inicial sobre la naturaleza del riesgo, pues si fuera evitable la adaptación será en principio, contraproducente; si la adaptación fuera propicia, cabrá impulsar políticas, incentivos, marcos regulatorios, intervenciones sensibilizadoras, reformas institucionales y legales, etc., que se orienten a remodelar los patrones de conductas comunitarios, domésticos o individuales para hacerlos congruentes con los riesgos inevitables, pues una adaptación bien lograda entraña una superación del estado previo —un paso adelante en un proceso que puede interpretarse de acuerdo a la metáfora evolucionista—.

Diagrama 1
Vulnerabilidad sociodemográfica: Esquema analítico básico y opciones de política



B. Prevención de riesgos sociodemográficos.

Como en otros ámbitos sociales, la prevención de los riesgos de vulnerabilidad sociodemográfica tiene por lo menos dos grandes méritos. El primero, es que genera un ambiente más seguro y propicio para el desarrollo de los actores que se enfrentan a un mundo menos amenazante. El segundo, es que comúnmente tiene costos sociales y económicos inferiores a los de las intervenciones dirigidas a reparar o enmendar efectos; una acción preventiva, que hace innecesario incurrir en gastos de todo tipo para responder a la materialización de las adversidades o para adaptarse a ellas, encierra grandes economías «hacia adelante».

En América Latina y el Caribe las políticas preventivas han demostrado su eficacia en la reducción de varios riesgos sociodemográficos, en especial los relacionados con rezagos. Este éxito se explica por una combinación de factores: (a) voluntad política activa y concreta, expresada en asignaciones presupuestarias, intervenciones sectoriales definidas y formación de recursos humanos calificados; (b) objetivos claros perseguidos con una visión de Estado, que no se amilana frente a la oposición de grupos de interés y que difunde mensajes claros sobre las consecuencias de las decisiones y conductas individuales para personas, hogares y comunidades; (c) cambios institucionales para el reconocimiento de derechos, el fortalecimiento de la acción intersectorial y el seguimiento de las metas trazadas; (d) participación activa de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales para establecer redes de concientización, promoción y asistencia, que complementan —y en varios casos exceden— la labor de la red pública. Además, muchas políticas preventivas se apoyan en una combinación de medios, entre los que se incluyen: intervenciones universales multisectoriales destinadas a garantizar el cumplimiento de derechos sociales y la disponibilidad de servicios básicos; acciones masivas de información; educación y comunicación; oferta de servicios especializados; por ejemplo: en los ámbitos de la salud primaria y la reproducción humana; y programas focalizados en los grupos más propensos a experimentar riesgos, en particular los pobres y los grupos étnicos.

Otro componente del éxito obtenido por las políticas preventivas en la región radica en cambios que las beneficiaron y dieron viabilidad. Estos cambios comprendieron tanto los de la esfera socioeconómica y cultural —incluso legal e institucional—, que erosionaron las bases materiales y subjetivas de los riesgos como los de orden tecnológico —entre ellos, los relativos a la salud y al control de la reproducción—. En cualquier caso, el éxito en evitar los riesgos se destacó no sólo por la rapidez de sus efectos, sino porque durante la ejecución de las políticas se sortearon crisis económicas, cambios de gobiernos y convulsiones sociales. No menos importante es el hecho de que la prevención se logró en contextos de persistentes desigualdades y debilidades socioeconómicas en algunos países, aunque ello alerta también sobre la condición «parcial» de la prevención de riesgos sociodemográficos, puesto que no logró impedir la persistencia de otros riesgos sociales.

Hay riesgos sociodemográficos frente a los cuales las intervenciones preventivas, en virtud de su pertinencia y factibilidad, son la primera opción de política. En la región hay numerosas experiencias, algunas bastante exitosas, de programas destinados a prevenir la

morbimortalidad por causas exógenas —violencia, adicciones, accidentes, etc.—, sobre todo aquella que afecta a los jóvenes. Algo similar ocurre con los riesgos de adquirir enfermedades transmisibles, destacando entre ellas los esfuerzos para prevenir las ETS y el VIH/SIDA, nuevamente entre los jóvenes. Menos conocidos, pero no por ello inexistentes, son los programas e intervenciones destinados a evitar la violación de los derechos humanos de los migrantes. La extensión de los servicios de salud sexual y reproductiva, por otra parte, ha demostrado ser eficaz para evitar la fecundidad no deseada; sin embargo, su cobertura limitada en las etapas iniciales de la vida reproductiva, así como su insuficiencia para lograr una efectiva habilitación de las parejas respecto del control de su reproducción, sugieren la subsistencia de lagunas persistentes.

La fecundidad adolescente puede y debe prevenirse, pero ello exige programas que reconozcan las peculiaridades de las personas de este grupo de edad y las especificidades de cada país. La experiencia regional indica que la ampliación de oportunidades y perspectivas educacionales y laborales de los/las muchachos/as contribuyen directamente a evitar la unión y la reproducción tempranas, socavando las bases de la fecundidad adolescente tradicional. Sin embargo, como los efectos de la ampliación de las oportunidades se manifiestan a largo plazo, se les debe complementar con intervenciones directas que sean conscientes de las bases culturales y materiales de esta fecundidad; la primera y más difícil tarea en un contexto de fecundidad adolescente tradicional es lograr que las propias parejas adopten la decisión de controlar su reproducción. Por otra parte, el carácter trunco de la modernidad sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe implica que la creciente liberalidad sexual se combina con la falta de acceso a medios para controlar la reproducción; en este caso, la prevención debe fundarse en intervenciones en varios ámbitos —comunidad, grupos de pares, familia—, y usando diversos canales —escuelas, medios de comunicación, líderes de opinión—, para promocionar conductas reproductivas y afectivas responsables. Además, es esencial diseñar programas especialmente dirigidos a la adolescencia, que actúen sobre los *determinantes próximos* de su fecundidad y consideren como población objetivo al conjunto de adolescentes en tanto individuos potencialmente activos en materia sexual; algunas de estas actividades deberán concentrarse en los/las adolescentes que ya se iniciaron o que probablemente lo harán pronto. Estos programas pueden proponerse dos objetivos: ampliar la información, el conocimiento y el acceso a los medios anticonceptivos, y retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Aunque ambos objetivos se pueden perseguir simultáneamente, la práctica muestra que suelen chocar entre sí y que tienden a alinear política o ideológicamente a los tomadores de decisiones; esta confrontación es muy importante, ya que hay consenso de que las imprescindibles intervenciones preventivas de la fecundidad adolescente no deben incentivar una iniciación sexual más temprana.

Si bien los/las adolescentes debieran tener acceso a los medios para evitar embarazos no deseados, ello no es condición suficiente para asegurar un control eficiente de la fecundidad; esto obedece tanto a razones técnicas, pues su uso no equivale a buen manejo de los medios (Guzmán y otros, 2001; CEPAL/CELADE, 2000b y 1998), como sicosociales —inestabilidad emocional y dificultades para lograr negociaciones reflexivas a dicha edad— que forman parte de las peculiaridades de este grupo de la población. Por lo

mismo, los programas de maternidad/paternidad responsable deben adecuarse a la dinámica sicosocial de los/las adolescentes. Además, en tanto propicien las dimensiones afectivas y de responsabilidad compartida, estos programas amplían la capacidad de respuesta frente al embarazo adolescente, pues incluyen estímulos para apoyar la estabilidad de la pareja.

Ahora bien, en algunos casos la eliminación del riesgo es improbable o desaconsejable. El envejecimiento es un buen ejemplo del primer tipo, pues analíticamente no hay duda de que una comunidad puede evitarlo si logra manejar una adecuada combinación de fecundidad y migración —actuar sobre la mortalidad para impedir el envejecimiento está descartado—. Sin embargo, una intervención en procura de aumentar la fecundidad, amén de ser una experiencia nutrida de fracasos, iría en contra de las tendencias predominantes que todavía persiguen incentivar una fecundidad más baja en la región; por ende, queda la posibilidad de recurrir a la migración selectiva por edad —una migración de reemplazo—, pero ni siquiera los países en mejores condiciones para instrumentar una opción en tal sentido la estiman útil o aconsejable para evitar el envejecimiento a largo plazo (CEPAL/CELADE, 2002). El envejecimiento, visto ahora desde el ángulo de la longevidad individual, permite introducir una distinción relevante en términos de política, cual es la de un tipo de prevención que no elimina el riesgo en sí, pero atenúa o posterga algunos de sus efectos adversos. Se trata del autocuidado, entre cuyas estrategias está la promoción de estilos de vida saludable, los controles rutinarios de salud, o el fortalecimiento de la autoestima. Ninguna de ellas impedirá que la persona envejezca, pero sí pospondrán el deterioro sicofisiológico asociado a la vejez y contribuirán al mantenimiento del aspecto clave de la calidad de vida de los adultos mayores: la funcionalidad.

Otro tanto puede decirse de los riesgos vinculados a la localización, algunos de los cuales pueden ser evitados mediante incentivos, ordenanzas administrativas y acciones anticipatorias. Un ejemplo de aquello son los planes de ordenamiento territorial que estipulan zonas no habitables —por «vulnerabilidad» ambiental— y definen sanciones para eventuales ocupantes. Sin embargo, otros riesgos vinculados a la localización, la concentración de los pobres urbanos o la dispersión de los rurales, parecen ser promovidos por poderosas fuerzas estructurales —entre ellas la acción del mercado inmobiliario, en el caso urbano—. Aunque lo anterior no inhibe acciones preventivas —en particular en el terreno mismo de las políticas públicas, que suelen tener efectos segregadores), sí sugieren considerar alternativas, entre las que destaca el aprovechamiento de otros espacios de integración, como la escuela, cuando aquella congrega a estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas—.

C. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a los riesgos sociodemográficos.

Además de que la ambigüedad entre adversidad y oportunidad hace inapropiado o desaconsejable prevenir algunos riesgos sociodemográficos y de que respecto de otros es virtualmente impracticable una estrategia de este tipo, hay riesgos cuya prevención no garantiza su extinción sino apenas su mitigación. Un ejemplo de este último caso es el de la fecundidad adolescente, puesto que si se lograra hacerla descender hasta niveles tan

reducidos como los de Japón, todavía será necesario diseñar mecanismos de apoyo y refuerzo para atender a las pocas madres adolescentes que habría. Hay también riesgos cuyo costo de prevención puede ser mayor que el de hacer frente a sus efectos adversos; es el caso de la segregación residencial. En estas circunstancias, la opción política que cabe es fortalecer la capacidad de respuesta de comunidades, hogares e individuos, lo que puede conseguirse mediante varias vías, muchas susceptibles de la intervención del sector público, del sector privado, de los organismos no gubernamentales y de los propios actores sociales.

Una de las vías para fortalecer la capacidad de respuesta consiste en el incremento de la competencia de los actores para anticipar la ocurrencia de riesgos y operar tempranamente sobre las adversidades que generan, evitando que se intensifiquen y generalicen. A diferencia de muchos riesgos sociales, en los que la alerta rápida va acompañada de intervenciones urgentes, los riesgos sociodemográficos se suelen desenvolver a lo largo de períodos extensos, por lo que las medidas para enfrentarlos no siempre tienen tanta premura; sin embargo, su postergación los puede tornar ineficientes o inútiles a mediano plazo. En el caso de las comunidades, la mejora de las destrezas anticipatorias exige formar recursos humanos y promover la investigación y sistematización de conocimiento especializado en el campo sociodemográfico; también requiere de arreglos institucionales para difundir este conocimiento y propender a su adecuado uso en el ámbito de la administración pública y de otros agentes responsables del diseño de políticas, la programación de recursos y la planificación estratégica. En el plano de los hogares e individuos es fundamental que este conocimiento se traduzca en una información comprensible.

Otra vía para fortalecer la capacidad de respuesta de los actores es prepararlos para soportar y administrar las adversidades que entraña la materialización de los riesgos, lo que se puede lograr ampliando su dotación de activos y potenciando sus destrezas para diseñar estrategias y ponerlas en práctica. Las políticas sociales juegan un papel central en este proceso de preparación, pues pueden proporcionar activos adecuados para reducir o neutralizar varias de las adversidades de los riesgos sociodemográficos: una educación idónea en medios rurales merma la probabilidad de que los migrantes sean discriminados en las ciudades; un flujo de ingresos creciente permite enfrentar con mayor holgura una prole numerosa; la disponibilidad de empleos para las mujeres fortalece la capacidad para enfrentar situaciones de ruptura conyugal o para solventar la vejez. Otras intervenciones específicas también pueden efectuar un aporte para la preparación: el apoyo sicosocial a las madres adolescentes favorece una maduración necesaria para asumir el proceso de crianza.

Una tercera vía para fortalecer la capacidad de respuesta de los actores es otorgarles protección social una vez acontecido el riesgo; esto puede lograrse mediante mecanismos paliativos que actúan *ex post* sólo sobre las comunidades, hogares y personas afectadas. Respecto de la vulnerabilidad sociodemográfica, un ejemplo ilustrativo son los programas desarrollados en Chile, Costa Rica y Jamaica para apoyar a las madres adolescentes en situaciones de alta precariedad económica mediante servicios especiales —educación,

salud y hasta trabajo— que evitan la deserción escolar o apoyan la crianza. Con todo, la modalidad de protección social más conocida y relevante opera *ex ante* mediante el aseguramiento. La seguridad social es parte medular de cualquier estrategia destinada a enfrentar los riesgos contemporáneos y, dada su proyección a largo plazo, ocasionalmente sirve como mecanismo adaptativo; sin embargo, por lo común opera respecto de riesgos que pueden evitarse y concentra su acción en adversidades típicamente asociadas a reducciones de ingresos. Frente a algunos riesgos sociodemográficos, como el envejecimiento, el divorcio o la mortalidad —en particular de los aportantes principales de un hogar—, el aseguramiento ofrecido por instituciones públicas y mercados específicos cumple un papel fundamental. No obstante —sean sus pilares la solidaridad o el manejo individual de la incertidumbre—, el aseguramiento tiene límites importantes, ya que la mayoría de los riesgos sociodemográficos no son cubiertos por la seguridad social y muchos de ellos carecen de mercados activos.

Por último, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los actores se extiende también al incremento de su participación, mediante la ampliación de sus formas de organización y de sus destrezas de movilización y de auditoría social. Los riesgos sociodemográficos no están ajenos a las decisiones políticas o técnicas en materia de fijación de normas, distribución de recursos públicos y asignación de prioridades sociales. Varios de estos riesgos, como los asociados a la reproducción o la migración, corresponden a derechos que no se pueden ejercer adecuadamente, lo que justifica la participación y presión ciudadanas como medios idóneos para revertir tal estado de cosas. En otros casos, el tejido social puede actuar como mecanismo compensatorio, redistribuyendo el peso de las adversidades o haciendo intervenir a las organizaciones comunitarias para que respalden a los afectados; las redes de migrantes son un ejemplo ilustrativo de respuestas colectivas frente a riesgos que, en principio, son individuales.

D. Adaptación a los riesgos emergentes.

La adaptación es, en última instancia, una forma de respuesta de largo aliento que implica transformaciones multidimensionales y endógenas —que van más allá de las reacciones coyunturales— de comunidades, hogares e individuos frente a la materialización de riesgos. Opera cuando los riesgos son inevitables, vienen con la modernidad o tienen como contra cara oportunidades superiores a las adversidades potenciales. Ante la evidencia y la convicción del carácter inexorable de riesgos sociodemográficos emergentes, la pertinencia de los procesos adaptativos es indiscutible; en cambio, no es la opción adecuada frente a riesgos propios del rezago económico y sociocultural, sobre todo porque su uso puede originar prácticas dañinas a largo plazo.

En algunos casos, la necesidad de adaptación no despierta discusión, aunque sí pueden hacerlo sus formas específicas. El envejecimiento de la población resulta ilustrativo al respecto, pues no hay duda de que las comunidades, los hogares y las personas deben aprender a convivir con los adultos mayores dentro de una «sociedad para todas las edades» (CEPAL/CELADE, 1997; Andrews, 2000). Adaptarse al envejecimiento demográfico exige

cambios profundos en materia de políticas sociales. Por ejemplo: reorientando los programas sanitarios para que asuman un escenario epidemiológico con patologías crónicas, complejas y de tratamiento costoso; de funcionamiento del mercado de trabajo: abriendo espacio para la inserción laboral de los adultos mayores a jornada parcial, de códigos culturales: para reconocer el aporte de las personas de más edad; y en general, de normas de convivencia social.

La adaptación también puede operar mediante mecanismos que contrapesen las adversidades que entraña el riesgo y eventualmente promoviendo las oportunidades que pudiera generar. Es el caso de la segregación residencial, que en virtud de las poderosas fuerzas que la activan, puede ser enfrentada a largo plazo con mecanismos compensatorios, que propicien la ampliación de los espacios para la interacción de distintos grupos socioeconómicos, la estructuración de un sistema escolar público de buen nivel y socialmente heterogéneo, la promoción de una cultura que valore la diversidad social y cultural o la redistribución de recursos entre gobiernos locales.

El diagnóstico técnico sobre el carácter del riesgo y sus proyecciones no se sustrae fácilmente de consideraciones políticas o ideológicas. Así, más allá de las intervenciones preventivas que se estime menester poner en práctica, la evaluación de los riesgos asociados a la segunda transición demográfica puede considerar su aumento como algo inexorable o ligado con modificaciones culturales de largo aliento y aconsejar acciones adaptativas. Por ejemplo: una forma de adaptación al nuevo escenario puede contemplar modificaciones institucionales para ampliar el reconocimiento institucional de las uniones consensuales y evitar la discriminación de los niños nacidos en estas uniones, lo que revelará que la prioridad no es erradicar el riesgo, sino impedir la materialización de sus consecuencias. Lo mismo puede ocurrir con los cambios legislativos que se refieran al divorcio y que procuren fortalecer la posición de la mujer y de los niños en caso de separaciones.

IV. Mensajes finales

1. Los riesgos sociodemográficos no desaparecen, sino que se transforman. El avance de la transición demográfica reduce algunos riesgos, pero no impide que otros persistan y que otros nuevos emerjan. Es decir, las adversidades que entraña la dinámica demográfica no terminan con la estabilización de la población.
2. Las comunidades, hogares y personas están expuestos, en su totalidad a riesgos de naturaleza sociodemográfica, lo que sugiere la necesidad de una aproximación de corte universalista en su análisis y en el diseño de políticas. En otros términos, la dinámica demográfica de la pobreza no es la única fuente de vulnerabilidad sociodemográfica.
3. No obstante su universalidad, los riesgos sociodemográficos tienen perfiles que varían entre los grupos de la población; entre los más postergados, como los pobres y los indígenas, es escasa la capacidad de respuesta y poca la habilidad de adaptación a estos riesgos —en algunos casos la adaptación puede tener efectos

- perversos—. En suma, es pertinente una actuación selectiva que concentre las intervenciones en los segmentos más postergados de la sociedad.
4. Las políticas pertinentes a la reducción de la vulnerabilidad sociodemográfica pueden dirigirse a prevenir los riesgos, fortalecer la capacidad de respuesta o mejorar las habilidades adaptativas; estas opciones no se limitan al ámbito sociodemográfico, pues las políticas públicas, en particular las sociales, actúan en estos tres planos. Por ende, hay dos desafíos centrales: articular las políticas netamente sociodemográficas con las restantes, e influir sobre el diseño de las políticas sociales para lograr sinergias —en este caso, potenciar sus efectos reductores de la vulnerabilidad sociodemográfica—.
 5. La prevención de riesgos sociodemográficos se ha demostrado exitosa y tiene grandes ventajas respecto de las otras dos líneas de intervención, lo que le otorga prioridad; sin embargo, no siempre es factible, ni siquiera conveniente, y su eventual deseabilidad no debe oscurecer el hecho de que aun frente a los riesgos más fáciles de evitar hay individuos que los experimentan y requieren de asistencia. La capacidad de respuesta se puede fortalecer anticipando riesgos, habilitando actores, brindando protección social y promoviendo la auto-organización; con todo, debe tenerse presente que las intervenciones de este tipo pueden ser costosas y no siempre totalmente efectivas, pues a veces suponen el peligro de promover inadvertidamente los riesgos al evitar que los individuos asuman las consecuencias de sus decisiones o conductas. La adaptación también puede conseguirse bajo diferentes esquemas y es particularmente apropiada para enfrentar riesgos inevitables a largo plazo, pero para que sea provechosa debe ser activa, lo que supone aceptar riesgos que son esencialmente no prevenibles o involucran oportunidades que no cabe menospreciar. En definitiva, se necesita evaluar cuidadosamente las opciones estratégicas, sopesando sus costos de todo tipo y su pertinencia.
 6. Por último, es claro que la región enfrenta un panorama complejo de vulnerabilidad sociodemográfica. Como los riesgos varían entre países y dentro de ellos, las políticas deben adecuarse a estas especificidades. El avance de la transición demográfica redujo riesgos tradicionales, pero no los extinguió, pues aún persisten en varias comunidades subnacionales y en algunos países mayoritarios. La emergencia de nuevos riesgos no ha ido acompañada de un fortalecimiento de la capacidad de respuesta ni de procesos adaptativos tempranos; en particular preocupa que la región esté experimentando un envejecimiento demográfico en un contexto de desarrollo socioeconómico precario. Así, las repercusiones de este cuadro que combina modificaciones en el escenario de riesgos sociodemográficos y persistencia de rezagos socioeconómicos y normativos ya se hacen manifiestas en la actualidad, pero se acentuarán en el futuro.

Bibliografía

Arriagada, I. (2001), Familias latinoamericanas. Diagnóstico y políticas públicas en los inicios del nuevo siglo, Santiago, CEPAL, Serie Políticas Sociales, No. 57, LC/L.1652-P.

Attanasio, O. y M. Székely (1999), *La pobreza en la América Latina: análisis basado en los activos; introducción*, El Trimestre Económico, Volumen LXVI(3), No. 263, páginas 317-364.

Bartfeld, J. (2000), *Child support and the postdivorce economic well-being of mothers, fathers, and children*, Demography, Volumen 37, No. 2, páginas 203-213.

Beck, U., A. Giddens, y S. Lash (1997), *Modernización reflexiva*. Madrid, Alianza .

BID (2000), *Desarrollo más allá de la economía, Progreso económico y social en América Latina*, Informe 2000, Washington, D.C.

Caballeros, R. y R. Zapata (2000), *Un tema del desarrollo: la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres*, México, D.F. CEPAL, LC/MEX/L.428.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2002), *Globalización y desarrollo*, Santiago, LC/G.2157(SES29/3).

_____ (2001a), *Construir la equidad en la infancia. Avances y rezagos en la situación de niños, niñas y adolescentes en Iberoamérica*, Santiago, CEPAL/UNICEF/SECIB, LC/G.2144.

_____ (2001b), *Informe del seminario regional sobre paternidad responsable en el Istmo Centroamericano*, México, LC/MEX/L.495(SEM.126/2).

_____ (2000a), *Panorama social de América Latina 1999-2000*, Santiago, LC/G. 2068-P.

_____ (2000b), *Equidad, desarrollo y ciudadanía*, Santiago, LC/G.2071(SES.28/3)).

_____ (2000c), *La brecha de la equidad: una segunda evaluación*, Santiago, LC/G.2096.

CEPAL/CELADE (Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (2002), *Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas; síntesis y conclusiones*, Santiago, LC/G.2170(SES.29/16)

CEPAL/CELADE (2000), *Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas de Edad: ponencias presentadas al Seminario Técnico*, Santiago, Serie Seminarios y Conferencias, No. 2, LC/L.1399-P.

_____ (1998), *Población, salud reproductiva y pobreza*, Santiago, LC/G.2015(SES.27/20).

_____ (1995), *Población, equidad y transformación productiva*, Santiago, CEPAL, Serie E, CELADE, No. 37, LC/G.1758/Rev.2-P; LC/DEM/G.131/Rev.2.

CEPAL/HABITAT, (2001), *El espacio regional: hacia la consolidación de los asentamientos humanos en América Latina y el Caribe*, Santiago, CEPAL, Libros de la CEPAL, No. 60, LC/G.2116/Rev.1-P

CONAPO (Consejo Nacional de Población de México) (2001), *La población de México en el nuevo siglo*, México, D.F., CONAPO.

_____ (1999), *La situación demográfica en México. 1999*, México, D.F., Consejo Nacional de Población

Easterly, W. y R. Levine (2001), *It's not factor acumulation: stylized fact and growth models*, The World Bank Economic Review, Volumen 15, No. 2, páginas 177-219.

Esping-Andersen, G. (2000), Social indicators and welfare monitoring, Ginebra, UNRISD, UNRISD Programme Paper on Social Policy and Development, No. 2.

Filgueira, C. (1998), *Welfare and citizenship: old and new vulnerabilities*, en Tokman, V. y G. O'Donnell (editores), *Poverty and inequality in Latin America: issues and new challenges*, Indiana, Universidad de Notre Dame, páginas 119-139.

Finot, I. (2001), *Descentralización en América Latina: teoría y práctica*, Santiago, CEPAL, Serie Gestión Pública, No. 12, LC/L.1521-P; LC/IP/L.188

Fischhoff, B., E. Nightingale y J. Iannota (editores) (2001), *Adolescent Risk and Vulnerability: Concepts and Measurement*, Washinton D.C., National Academy Press, <http://books.nap.edu/books/030907620X/html/index.html>

Glewwe P. y G. Hall (1995), *Who is most vulnerable to macroeconomic shocks?*, Washington, Banco Mundial, Working Paper No. 117.

Guzmán, J. (2002), **Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe**, Santiago, CEPAL, Serie Población y Desarrollo, No. 28, LC/L.1737-P.

Guzmán, J., Hakkert, R. y J. Contreras (2001), *Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe*, México, FNUAP.

Katzman, R. (2001), *Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos*, Revista de la CEPAL, No. 75, páginas 171-189

Katzman, R. (2000), «*Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social*», en BID-Banco Mundial-CEPAL-IDEA, 5° Taller Regional. La medición de la pobreza: métodos y aplicaciones (continuación), Aguascalientes, 6 al 8 de junio de 2000, Santiago de Chile, CEPAL, p. 275-301, LC/R.2026.

Katzman, R. y G. Wormald (2002), *Trabajo y ciudadanía*, Montevideo, Sofilco.

Katzman, R. y otros (1999), *Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en el Uruguay*, Montevideo, Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oficina de la CEPAL en Montevideo, LC/MVD/R.180.

Lipton, M. (1995), *Population and poverty: how do they interact*, en IUSSP, Seminar on Demography and Poverty. Papers, Lieja, IUSSP, páginas 1-31.

Livi-Bacci, M. (1995), *Pobreza y población*, Notas de Población, n. 62 -o- Pensamiento Iberoamericano, n. 28, páginas 115-138.

Martínez, J. (1999), *Población y pobreza: contenidos paradigmáticos para la demografía*, Lovaina, Instituto de Demografía de la Universidad Católica de Lovaina, Bruylant-Academia.

Massey, D. (2002), *A brief history of human society: the origin and role of emotion in social life*, Volumen 67, No. 1, páginas 1-29.

Mertens, W. (1995), *Crecimiento de la población y desarrollo económico*, Santiago, CEPAL, Cuadernos de la CEPAL, No. 75, LC/DEM/G.162.

Moncada, G. (2000), *Propuesta de cuestionario para medir el impacto de los choques sobre el bienestar y comportamiento de los hogares*, en CEPAL, Sexto Taller Regional sobre Indicadores sobre el Desarrollo Social, 495-514, LC/R.2046.

- Moser, C. (1998), *The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies*, World Development, Volumen. 26, No. 1, Gran Bretaña, Elsevier Science, páginas 1-19.
- Ocampo, J. (2001), *Retomar la agenda del desarrollo*, Revista de la CEPAL, Santiago, No. 74, páginas 7-19
- Pinto da Cunha, M. (2002), Urbanización, territorio y cambios socioeconómicos estructurales en América Latina y el Caribe, Santiago, CEPAL/CELADE, Serie Población y Desarrollo No. 30
- Pizarro, R. (2001), La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina, Santiago, CEPAL, Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, No. 6, LC/L.1490-P.
- Rodríguez, J. (2001), Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?, Santiago, CEPAL, Serie Población y Desarrollo, No. 16, LC/L.1576-P
- Rematoso, A. (2002), *Ciclo de vida familiar, patrones reproductivos y el trabajo como activo: evolución y estrategias en Uruguay*, Notas de Población, Año XXIX, No. 74, Santiago, páginas 111-161.
- Ruvalcaba, R. (2001), Localidades y hogares en un mundo de propensiones, documento presentado al seminario internacional «Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe» realizado en la CEPAL, Santiago de Chile, 20 y 21 de junio de 2001.
- Sabatini, F. (2001), *Transformação urbana e dialética entre integração e exclusão social: reflexões sobre as cidades latino-americanas e o caso de Santiago do Chile*, en Oliveira y Pinto, 2001, páginas 165-190.
- Sana, M. (2001), *La segunda transición demográfica y el caso argentino*, V jornadas argentinas de estudios de población, 1999, Buenos Aires, Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), páginas 65-77.
- Sennet, R. (2000), La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, cuarta edición.
- Titelman, D., A. Uthoff y L Jiménez, (2000), *Hacia una nueva seguridad social en el siglo XXI: sin solidaridad en el financiamiento no habrá universalidad*, Revista Panamericana de Salud Pública, Volumen. 8, No. 1-2, páginas 112-117.
- UNFPA (1998), *The State of World Population. The new generations*, Nueva York
- United Nations (2001), *World Population Prospects. The 2000 Revision*, Nueva York, División de Población de las Naciones Unidas, 2 volúmenes, ST/ESA/SER.A/198 y ST/ESA/SER.A/198
- Van de Kaa, D. (2001), *Postmodern fertility preferences: from changing value orientation to new behavior*, en Bulatao y Casterline, páginas 290-331.